



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

Título

Renta básica universal. Evolución histórica y debate actual

Autor/es

IVÁN MARTÍNEZ VILLOSLADA

Director/es

EMILIO BARCO ROYO

Facultad

Facultad de Ciencias Empresariales

Titulación

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Departamento

ECONOMÍA Y EMPRESA

Curso académico

2019-20



***Renta básica universal. Evolución histórica y debate
actual,*** de IVÁN MARTÍNEZ VILLOSLADA

(publicada por la Universidad de La Rioja) se difunde bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los titulares del copyright.



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Renta básica universal. Evolución histórica y debate actual

Universal basic income. Historic development and current debate

Autor: D. Iván Martínez Villoslada

Tutor: Prof. D. Emilio Barco Royo

CURSO ACADÉMICO 2019-2020

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
2. ¿QUÉ SE ENTIENDE EN LA ACTUALIDAD POR RENTA BÁSICA UNIVERSAL?	2
3. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LA IDEA DE RENTA BÁSICA.....	4
4. DEBATE	10
4.1. Argumentos a favor	10
4.1.1. Renta básica y libertad	10
4.1.2. La justicia de la renta básica	15
4.1.3. Argumentos económicos.....	18
4.1.4. Renta básica y cambio tecnológico.....	24
4.1.5. Renta básica, trabajo y empleo	25
4.1.6. Financiación de la renta básica	28
4.2. Argumentos en contra	32
4.2.1. La injusticia de la renta básica	32
4.2.2. Crítica a la universalidad	33
4.2.3. Subproducto del neoliberalismo al Estado del Bienestar.....	33
4.2.4. Disfunciones sociales y económicas	34
4.2.5. Inflación	35
4.2.6. Críticas a la financiación de la renta básica.....	35
4.2.7. Críticas feministas.....	36
4.2.8. Alternativas	36
5. CONCLUSIONES.....	40
6. BIBLIOGRAFÍA.....	42

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURAS

Figura 1. Impacto del sistema RGI/PCV/AES en la prevención de la pobreza	19
Figura 2. Comparación de distintas políticas sociales a través de los principios de justicia social de Standing.....	20
Figura 3. Ficha técnica de la encuesta sobre renta básica realizada por GESOP en 2015	26
Figura 4. Población receptora de la renta básica en la simulación Arcarons, Raventós y Torrens	29
Figura 5. Ahorros de la sustitución de los subsidios públicos por una renta básica en la simulación de Arcarons, Raventós y Torrens	29
Figura 6. Comparación de los tipos efectivos antes y después de la implantación del modelo de financiación de Arcarons, Raventós y Torrens	30

RESUMEN: La renta básica incondicional (RBI) es una transferencia monetaria periódica que recibirían de forma individual todos los ciudadanos sin ningún tipo de restricción o condición. La idea se ha hecho muy popular en los últimos años, debido a la proliferación de experimentos y pruebas piloto de renta básica alrededor del mundo, el aumento de la pobreza y la desigualdad, y el miedo al desempleo como consecuencia del desarrollo tecnológico y la automatización. Sin embargo, no es una idea nueva.

El tema de la renta básica universal es extenso, existen un gran número de propuestas, ideas, críticas y alternativas, como resultado de la variedad ideológica de los pensadores y autores. El objetivo de este trabajo es examinar la propuesta moderna de la renta básica universal y su debate. Para ello, se desarrollará un análisis histórico y se mostrarán los principales argumentos y sus críticas.

En el corto plazo, la idea de renta básica universal no va acabar. Los problemas que la renta básica pretende solucionar no van a desaparecer próximamente. Por ello, es necesario un profundo análisis. Como consecuencia, se realiza este trabajo.

ABSTRACT: Universal basic income (UBI) is a regular cash transfer received by all individual citizens without any restrictions or conditions. This idea has become very popular in recent years, as a result of experiments and pilot programs about basic income around the world, the increase in poverty and inequality levels, and the fear of unemployment as a consequence of the technological development and automation. However, it is not a new idea.

Universal Basic Income is a wide topic, there is a big number of models, ideas, criticisms and alternatives, due to of the ideology variety of authors and thinkers. The aim of this project is to examine the modern idea about universal basic income and its debate. For this, a historical analysis and the most important arguments and critics will be explained.

UBI is not an idea that is going to end in short term, the problems that UBI are supposed to solve will not disappear. That is the reason why a profound analysis is needed. In consequence, the realization of this project arises.

1. Introducción

La renta básica universal ha recibido una importante atención en los últimos años. La popular y controvertida premisa “dinero a toda la población sin ningún tipo de contraprestación o control” es lo suficientemente llamativa para que muchos pensadores, economistas, medios de comunicación, políticos o activistas sociales dediquen su tiempo a reflexionar sobre la idea.

En un contexto donde después de años de subsidios condicionados y políticas sociales no han sido capaces de solucionar la desigualdad y pobreza existente, donde las condiciones de los empleos remunerados empeoran y el trabajo asalariado no es suficiente para salir de la pobreza, donde pruebas piloto de renta básica se realizan por todo el mundo, y donde se clama que la cuarta revolución industrial conducirá a una sociedad donde toda la producción estaría mecanizada y muchísimos empleos desaparecerían; en ese contexto, la idea de una renta básica universal ha surgido como respuesta a esa problemática de la sociedad actual (Raventós, 2019).

Voces críticas han proliferado a la par que aumentaban las de sus defensores. Sin embargo, no hay una única e inamovible propuesta de renta básica universal, existen una gran variedad de ideas que recorren todo el espectro ideológico. Esto es debido a que hay muchos aspectos que la rodean: ¿quién lo recibiría?, ¿cuál sería la cantidad?, ¿cuál es la justificación ética y moral para implantar la idea?, ¿cómo se financiaría?, ¿cómo se procedería con el resto de políticas sociales?, etc. También han aparecido propuestas con nombres y características similares, que a pesar del parecido, no se enmarcarían dentro de la idea de una renta básica universal, pues esta es universal, incondicional, individual, periódica y suficiente.

Tampoco es una idea moderna. Propuestas y justificaciones para entregar una cantidad monetaria a la población han aparecido a lo largo del desarrollo histórico. Desde la Grecia antigua hasta la actualidad.

El objetivo de este trabajo es entender cuáles son las características que definen la renta básica universal, cómo ha sido su evolución histórica hasta lo que se conoce a día de hoy como renta básica universal y, fundamentalmente, analizar el debate que ha surgido alrededor de esta idea.

Para ello, se han empleado una gran variedad de fuentes secundarias de muchos pensadores, economistas y filósofos con gran diferencia ideológica. Se pueden destacar a los siguientes: Daniel Raventós (Profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y presidente de la Red Renta Básica), Guy Standing (Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Cambridge y miembro fundador de la Basic Income Earth Network), Thomas Piketty (Profesor de la Escuela de Economía de París y especialista en desigualdad económica y distribución de la renta), Juan Torres López (catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla), Juan Ramón Rallo (Doctor en Ciencias Económicas, y profesor de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos) y Miguel Anxo Bastos Boubeta (Doctor en economía por la Universidad de Santiago de Compostela), entre otros muchos autores.

También es preciso destacar el pensamiento filosófico y económico de Philippe van Parijs, John Rawls, Robert Nozick, Charles Murray, Milton Friedman y Richard Wolff; pues han sido especialmente relevantes a la hora de realización de este trabajo.

El trabajo se estructura en las siguientes secciones principales:

En la primera sección se realiza un breve análisis sobre distintas definiciones de renta básica para poder extraer cuáles son las características más importantes que la definen.

En la segunda, se muestran los antecedentes y se estudia la evolución histórica de la idea de la renta básica hasta llegar a lo que en la actualidad se conoce como renta básica universal.

En la tercera, la más extensa de todas, se exponen las principales posturas del debate actual de la renta básica universal. En primer lugar, los argumentos a favor de la renta básica, como una medida justa, útil para reducir la desigualdad y aumentar el crecimiento económico, y que otorgaría la libertad efectiva a toda la población gracias a la libertad republicana. También aparece el modelo de financiación más acorde a las ideas de justicia y libertad desarrolladas. A continuación, los argumentos en contra, desde críticas a lo desarrollado hasta este momento, hasta las alternativas más destacadas.

Finalmente, la última sección trata sobre las conclusiones del trabajo. En síntesis, la renta básica universal es una idea muy especial, tildada muchas veces de idealista y utópica, que requiere de un cuidadoso estudio debido a todas las propuestas, ideologías, críticas y alternativas. El resultado de ese afán por estudiar todo lo que rodea a la idea de renta básica universal está plasmado en este trabajo. Se podría afirmar que los objetivos del trabajo se han cumplido con creces.

2. ¿Qué se entiende en la actualidad por renta básica universal?

Para poder analizar correctamente la renta básica universal es preciso dar una correcta definición y concretar los criterios que la caracterizan. Existe una gran variedad de definiciones debido al gran número de autores y organizaciones que teorizan sobre ella. La Red de Renta Básica la define como “un ingreso pagado por el estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva” (Red de Renta Básica, s.f.).

Otros economistas la definen de distinta forma:

- Daniel Raventós la define como una asignación monetaria a toda la población sin ningún tipo de condición (Raventós, 2019).
- Guy Standing la define como “una cantidad modesta de dinero pagada incondicionalmente a los individuos de forma regular” (Standing, 2018).
- Juan Torres López como un ingreso que se percibe sin contrapartida, es decir, sin que sea una retribución por realizar alguna actividad productiva (Torres López, 2019).

Todas estas definiciones comparten una serie de características comunes que pueden delimitar la renta básica, diferenciándola de cualquier otro tipo de prestación o ingreso similar. Los criterios que caracterizan una renta básica se exponen a continuación.

Que la renta sea básica significa que tendría que ser, como mínimo, una cantidad que proporcione una seguridad económica suficiente. Por tanto, todos los autores comparten que cualquier importe entregado debería situarse por encima del umbral de la pobreza (Raventós, 2019).

La universalidad es otra característica fundamental. Esto hace que cada persona de un territorio tendría derecho a ser receptor de la renta, independientemente de sus características personales. Para Raventós (2017), por ejemplo, la renta básica la recibiría

toda la ciudadanía y residentes acreditados en el lugar donde se implantase. No obstante, cabe mencionar que existe entre los autores una discrepancia sobre si los menores de edad serían receptores, y en caso afirmativo, su cuantía respecto a la población adulta.

La incondicionalidad es otro criterio importante. Para obtener la renta básica, no se establecerían condiciones ni de renta, ni de gasto, ni de comportamiento. Es decir, las personas la recibirían independientemente de sus ingresos, situación laboral, etc; y no habría exigencias en como los receptores la usasen y gastasen (Standing, 2018).

Cada persona recibiría la renta de forma individual y no en base al hogar o al núcleo familiar. Por tanto, no se considerarían circunstancias como el estado familiar, civil, domestico, etc. Es decir, no se entregaría la renta al núcleo familiar, sino a cada miembro como individuo, diferenciándose de muchas prestaciones actuales que tienen en consideración a la unidad familiar para la comprobación de recursos y la entrega de las asignaciones monetarias.

Estos últimos criterios marcan ya una gran diferencia respecto a los actuales subsidios condicionados. Pues estos los percibe solo una pequeña parte de la población, basándose además en el cumplimiento de una serie de requisitos. Frente a esto, la renta básica la recibiría toda la población sin ningún tipo de condición.

Una renta básica se otorgaría en forma monetaria y no en especie. Esto se debe a que las asignaciones en especie tienen un menor margen de libertad e impone y limita una serie de comportamientos a los receptores (Raventós, 2019).

La renta sería pagada en intervalos periódicos. Por ejemplo, de forma mensual.

Además, la renta básica sería un derecho a tener una seguridad de ingresos básica. Por ello, no podría ser anulable, ni rembolsable, ni ser incautada.

La gran variedad de defensores provoca una gran diversidad de definiciones y propuestas. No obstante, se han expuesto los criterios comunes que definen la renta básica. Una renta básica es un derecho a una asignación monetaria suficiente, universal, incondicional, individual y periódica.

Otro producto de los muchos de autores, es la pluralidad de nombres para referirse al mismo concepto, siendo “renta básica” la denominación más simple y común. Hay autores que añaden la palabra universal para enfatizar su universalidad. De la misma forma, hay quiénes la denominan renta básica incondicional para reflejar la incondicionalidad (Standing, 2018).

Ingreso ciudadano, renta de ciudadanía, renta básica ciudadana, dividendo social, o subvención para la estabilización; son algunos de los nombres para referirse a propuestas de renta básica. Cada uno, con sus particularidades y connotaciones.

El ingreso ciudadano (o renta de ciudadanía) tiene la connotación de que solo los ciudadanos la recibirían, con la problemática de que el término no es del todo correcto, debido a que no concuerda con la mayoría de propuestas de renta básica, pues estas excluyen a los que viven en el extranjero, e incluyen a los residentes legales.

El término dividendo social es muy interesante para los defensores, pues se basa en el argumento a favor de la renta básica, como justicia social, es decir, un instrumento para repartir la riqueza social y colectiva. Este argumento se desarrollará más adelante.

Subvención para la estabilización es uno de los términos propuestos por Standing (2018) para enfatizar que la renta variaría para adaptarse a los ciclos económicos.

Existen también propuestas alternativas, con ideas y nombres similares a la renta básica, pero que no cumplen todos los criterios:

La subvención de capital básico sería una cantidad mayor entregada en una única ocasión a los individuos de forma incondicional una vez llegados a una edad determinada. Difiere de la renta básica en la regularidad de los pagos.

La renta de participación es una propuesta del economista Tony Atkinson. Aunque comparte muchas características con la renta básica, impone la condición de que los receptores tuviesen que realizar alguna actividad económica para recibirla.

El ingreso mínimo vital es una medida creada en 2020 por el gobierno de España como respuesta al impacto social provocado por la crisis sanitaria del COVID-19. Está medida está lejana de ser una renta básica: solo la recibiría una parte de la población (lo pueden solicitar las personas entre los 23 y 65 años), la cuantía se establecería en función de los miembros cada hogar, fluctuando entre 461€ como mínimo, y 1.015€ como máximo; y estaría limitada a doce pagas, entre otras características (Estévez & Olías, 2020).

Estas propuestas, junto a otras muchas alternativas, serán desarrolladas y debatidas en apartados próximos.

Una última consideración para poder terminar de delimitar la renta básica es que su implantación no implicaría necesariamente una reducción de los servicios públicos. Si bien es cierto que hay autores que defienden la renta básica como un sustituto total o parcial de las políticas actuales relacionadas con el Estado de Bienestar; hay otros que la visualizan como un acompañante al resto de prestaciones, y una redistribución de los que obtienen más renta al resto de la población (Howard, 2017).

3. Antecedentes y evolución de la idea de renta básica

En este apartado se hará un repaso de la historia, desde la antigua Grecia hasta la actualidad, de cómo se ha llegado a lo que hoy se conoce como renta básica universal. Se verán sistemas con una gran similitud a la renta básica y pensamiento económico que ha justificado dichos sistemas.

Efilates, y posteriormente Pericles (Atenas, siglo V a. C.), iniciaron reformas que implicaban pagar a los ciudadanos para que participasen en la vida política de la ciudad. Este ingreso ciudadano no estaba condicionado, era una forma de capacitar a la plebe para que participase en los asuntos públicos (Standing, 2018).

El Estado Romano tenía un modo de organizar y distribuir alimentos a la ciudad de Roma, pero fue a partir del Imperio cuando se convirtió en un arma política. Esto se hizo a través de la *annona* (derivado de *annus*, el resultado inmediato a cada cosecha).

Para satisfacer las necesidades de abastecimiento de Roma, el emperador Augusto creó la *Praefectura annonae*, una oficina encargada de abastecer de forma gratuita, tanto a Roma como al ejército, de grano y aceite, obtenidos de los impuestos a las provincias, de las propiedades imperiales y de requisiciones (Remensal Rodríguez, 2002).

Esto era una importante arma política y de propaganda. Augusto creó personalmente el sistema de forma compleja, limitando el poder y los recursos de cada escalón administrativo. De tal forma que fuese imposible utilizarlo en contra del emperador.

Cada emperador intentó mostrarse providente. La plebe se aprovechaba de los recursos de los territorios. De esa forma, el emperador garantizaba la paz social, asegurando la subsistencia de la plebe de Roma.

En el Renacimiento, los humanistas tuvieron inspiración en la anona romana.

En Utopía (1516) Tomás Moro hizo una crítica al status quo europeo: las causas más profundas de los males de la sociedad eran causados por el sistema de propiedad privada y la lógica del dinero como valor de cambio. La clase dominante, codiciosa y holgazana, perpetúan las guerras, impactan sobre las fuerzas de trabajo y la familia y su monopolio sobre la propiedad privada dio como resultado una clase pobre y compelida a robar para subsistir. Por ello, la pena de muerte a los ladrones es un castigo injusto, exagerado, inútil y disfuncional para la paz social (Russo, 2004).

Moro fue el primero en imaginar cómo sería una sociedad con renta básica y un sistema de comunidad de bienes; una alternativa a la pena de muerte, pues con medios de subsistencia garantizados, una persona no tendría que recurrir continuamente al robo como su única forma de sobrevivir.

Juan Luis Vives (1492-1540) pensó en una propuesta para garantizar un mínimo de subsistencia. Sin embargo, su modelo estaba enfocado a que los pobres trabajaran a cambio de la ayuda. Una medida para evitar que “los mendigos se habituasen a su estado miserable, deleitándose por la vida vagabunda y aborreciesen el trabajo”. La solución de Vives era obligar a trabajar a los que puedan y separarlos de los que no, dándole los peores tratos y tareas (Maza, 2017).

Tanto las propuestas de Moro como de Vives contribuyeron a que la asistencia debía estar financiada y administrada por organismos públicos, y no depender de la caridad.

John Locke (1632-1704) defendía que el estado tiene que proteger los derechos de propiedad individuales, pues definía al hombre libre como aquel que dispone de propiedades que respaldasen su autonomía efectiva (Mundó, 2004).

Locke utilizaba el término “propiedad” no sólo para referirse a los bienes materiales, sino también a lo que denominaba “vida, libertad y hacienda”. Entendía que la libertad y la vida son derechos inalienables, rechazando la propiedad como un derecho de control absoluto sobre las cosas. Es decir, él sostenía que la propiedad no podía reducirse a un simple conjunto de cosas ni a un derecho de control.

En los siglos XVIII Y XIX, tanto moralistas cristianos como revolucionarios franceses abogarían por modelos de rentas básicas. Montesquieu (1748) defendía que el Estado debía una asistencia a los ciudadanos. Algo similar defendió el marqués de Condorcet, ilustrado de su época: un ingreso establecido por el Estado para evitar la bancarrota de las familias y reducir la desigualdad, la inseguridad y la pobreza (Maza, 2017).

Thomas Paine, en su Justicia agraria (1795) propuso un ingreso anual universal para compensar a cada ciudadano por sus derechos naturales perdidos por el sistema de la propiedad de la tierra (Standing, 2018).

Según él, la tierra sin cultivar era propiedad de toda la raza humana. La propiedad de la tierra se basaba únicamente en el valor de su mejoramiento. Por tanto, los propietarios deben a la comunidad una compensación por la pérdida de la “herencia natural de la tierra” tras la introducción del sistema de propiedad privada.

Su plan consistía en una subvención de capital a los que cumpliesen la mayoría de edad y una renta básica anual a los ancianos; de forma universal, sin distinguir en la riqueza de los receptores, pues el pago ocupa el derecho de toda persona de la “herencia natural”.

El radical inglés, Thomas Spence (1750-1814), también argumentó a favor de una renta básica como una cuestión de justicia y un derecho natural; diseñando un dividendo social, a todos los habitantes, derivado de las rentas de la tierra pagado a los fondos parroquiales.

En la Inglaterra de la época Victoriana (siglo XIX) se crearon las leyes de pobres como respuesta del Estado a la inestabilidad surgida por la privatización de las tierras comunales de las que dependía la supervivencia de gran parte de las familias campesinas. Se subsidiaron, mediante un ingreso mínimo, que variaba en función del precio del grano, las necesidades de aquellas familias que no tuviesen unas rentas que cubriesen lo básico. Como consecuencia, surgió un acuerdo tácito entre los patrones de pagar salarios bajos, que provocó un empeoramiento de las condiciones de vida de los asalariados (Maza, 2017).

En el siglo XIX diversos escritores pensaron alguna forma de renta básica. Por ejemplo, los socialistas utópicos Charles Fourier, Joseph Charlier o François Huet (BIEN, s.f.).

Fourier argumentaba que la violación del derecho natural de cada persona a “cazar, pescar, recoger fruta” (es decir, a subsistir); implica que la civilización debe la subsistencia a todos aquellos incapaces de satisfacer sus necesidades básicas. No obstante, para él, el ingreso garantizado no sería universal, más bien se trataría de un derecho incondicional para los pobres en forma de compensación por la pérdida de acceso directo a los recursos naturales.

Charlier, inspirado por, vio el derecho a la propiedad de la tierra como la base de un derecho incondicional a recibir ingresos. Pero rechazó no universalidad de Fourier. Bajo el nombre de dividendo territorial, propuso dar a cada ciudadano un pago periódico de una cantidad fijada anualmente por un consejo nacional representativo, sobre la base del valor de alquiler de todos los bienes inmuebles.

Huet, en 1853 defendió una transferencia incondicional a todos los adultos jóvenes, financiada con impuestos sobre las herencias y las donaciones.

El economista político, Henry George, propuso una renta básica incondicional, financiada por el excedente de las rentas de la tierra, como derecho y no como caridad, similar a las ideas de Phaine.

En el siglo XX se diferencian claramente tres periodos donde el debate de la renta básica es más intenso (BIEN, s.f.).

El primer periodo surge tras la primera guerra mundial, bajo el pensamiento de Bertrand Russell, Dennis Milner, Clifford H. “Major” Dugglas o George D.H. Cole.

El filósofo Bertrand Russell (1918) propuso un ingreso universal, incondicional y suficiente para cubrir las necesidades mínimas. Pero, añade que también debería darse una mayor cantidad a aquellos que estén comprometidos con un trabajo que la comunidad reconociese como útil. De tal forma que todo el mundo tendría libertad y nadie estaría obligado a trabajar. Para él, este modelo social combinaba las principales ventajas del anarquismo y el socialismo: la libertad y los incentivos del trabajo, respectivamente.

El ingeniero y miembro del partido laborista británico, Dennis Milner, escribió en 1918 un corto panfleto en el que defendía la introducción de un ingreso pagado incondicionalmente a todos los ciudadanos del país. El denominado bono estatal solucionaría el problema de la pobreza, pues todo el mundo tiene el derecho moral a recibir la subsistencia, sin que sea necesaria una obligación trabajar para poder obtenerlo (BIEN, s.f.).

C.H. Dugglas, ingeniero británico, reflexionó sobre la productividad en la industria del país post guerra mundial, los riesgos de la sobreproducción y una división entre la producción económica y el poder adquisitivo de los trabajadores. Por ello, fundó el movimiento por el “crédito social” e ideó el pago mensual de un dividendo nacional a todos los hogares.

El movimiento por el “crédito social” fue ganando popularidad en los círculos de intelectuales cercanos al partido laborista británico. Uno de ellos, el economista George D.H. Cole defendía que el poder productivo era el resultado del esfuerzo del momento y de la herencia social de invenciones, educación y habilidades incorporadas para mejorar la producción; por tanto, se debe compartir esta herencia común bajo lo que él denominó dividendo social.

El segundo periodo ocurrió en la década de los sesenta, principalmente en Estados Unidos. Fue un momento con una gran preocupación por el desempleo tecnológico y estructural; y de luchas por los derechos civiles.

Robert Theobald defendió un ingreso mínimo bajo la idea que la automatización eliminará los empleos remunerados. Por ello, es necesario la intervención del gobierno para otorgar a los ciudadanos la capacidad de comprar los productos producidos de los autómatas.

El economista Milton Friedman propuso una simplificación y alternativa del estado del bienestar americano, bajo la introducción de un impuesto negativo sobre la renta, integrando el impuesto sobre la renta y los programas sociales de transferencias. Además, esta alternativa sería una forma de transición al estado ideal de Friedman de un capitalismo sin transferencias.

James Tobin, en contraste con el impuesto negativo sobre la renta de Friedman, propuso un pago automático a todos los ciudadanos, denominado demogrant. Sin que fuese un sustituto del Estado del Bienestar, era una mejora de ese sistema al hacer más eficiente un mecanismo para que la gente con menos recursos aumentase sus ingresos y poder adquisitivo.

En un contexto prometedor, donde la dependencia a los programas sociales aumentaba, surge el Plan de Asistencia Familiar, tras una petición al Congreso por parte de cientos de economistas de adoptar un sistema de ingresos garantizados. El plan era un ambicioso programa de social preparado por el senador demócrata Daniel Patrick Moynihan bajo el nombre de la administración republicana del presidente Richard Nixon. Similar a un impuesto negativo sobre la renta, preveía la abolición del programa de ayudas dirigido a las familias e incorporó un ingreso garantizado con suplementos financieros para los trabajadores. Sin embargo, la proposición fue finalmente rechazada en el Senado.

A finales de la década de los setenta, el debate se fue apagando en Estados Unidos mientras comenzaba uno en algunos países europeos como Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, Alemania o Francia. Estos debates nacionales emergieron de forma independiente, sin entrar en contacto los unos con los otros hasta la creación de la BIEN (Standing, 2018).

En 1986, se organizó la primera reunión que congregó a partidarios de la renta básica universal de diferentes países. El éxito, llevó a la creación de la BIEN (Basic Income European Network o Red Europea de Renta Básica). Esto da comienzo al tercer período.

La creación de redes similares en Estados Unidos, Sudamérica, Sudáfrica; los contactos con las redes de Australia y Nueva Zelanda; y la presencia de no europeos a los congresos llevaron en 2004 a renombrar la red, cambiando European por Earth (Mundial).

La BIEN organiza congresos cada dos años, y durante toda su historia ha mantenido el debate activo (un debate abierto a todas las perspectivas), refinando los argumentos, estudiando las objeciones y recogiendo la evidencia empírica. Sus miembros han producido numerosos escritos e investigaciones. En 2017 existían treinta y cuatro redes afiliadas (Standing, 2018).

En la actualidad se encuentra el sistema de renta básica más genuino a través del Fondo Permanente de Alaska.

Alaska ha sido siempre un territorio con una gran riqueza de recursos naturales. A mediados de la década de 1970, Jay Hammond, el gobernador republicano de Alaska (Estados Unidos), estaba preocupado de que la enorme riqueza generada por los yacimientos petroleros en Prudhoe Bay, los más grandes de América del Norte, sólo beneficiaría a la población actual del estado. Por ello sugirió la creación de un fondo para garantizar que esta riqueza se preservaría, a través de la inversión de los beneficios del petróleo.

En 1976, el Fondo Permanente de Alaska fue creado, concibiendo un pago anual de un dividendo a todos los residentes con el fin de conseguir que la población se interesase en el crecimiento y continuidad de Alaska. Desde la implementación del programa, todos los residentes oficiales de Alaska (al menos seis meses) han recibido el dividendo cada año, independientemente de sus características.

El importe del dividendo varía en función de los ingresos obtenidos de los yacimientos. Actualmente alrededor de 650.000 personas reciben el dividendo. En 2019, el importe fue de 1606\$. En 2015 el pago alcanzó su máximo en toda su historia, 2072\$ (Cordova, 2019).

El 6 de junio de 2016 se realizó en Suiza un referéndum para decidir la propuesta de la introducción de una renta básica incondicional que permitiese una vida digna y la participación en la vida pública para toda la población. La propuesta fue rechazada con el 76,9% de los votos en contra y el 23,1% favor, con una abstención del 54% (van Parijs, 2017).

Según el filósofo y defensor de la renta básica, Philippe Van Parijs (2017), este resultado se debe a diversos factores. En primer lugar, se trataba de una medida convocada por iniciativa de acuerdo a la legislación suiza (si una propuesta reúne más de cien mil firmas validadas en dieciocho meses, el gobierno está obligado a organizar un referéndum nacional) y sus impulsores no delimitaron ni el método de financiación, ni la cantidad, aunque especularon con una cantidad que supondría el 38% del PIB, y que en opinión de van Parijs, sería políticamente irresponsable. Aunque no por ello, no sostenible económicamente.

En segundo lugar, Suiza sería el país europeo que menos apoyaría una renta básica debido a sus niveles bajos de desempleo y pobreza, y su ética de trabajo calvinista. Por último, la mayoría de las direcciones de todos los partidos políticos, apoyaron el “no” en la votación.

A pesar de ello, van Parijs valora el resultado como un hito importante en el objetivo de conseguir una renta básica universal, gracias al debate que surgió de forma global, y que permitió reflexionar sobre la naturaleza, los desafíos y las dimensiones de la renta básica en el siglo XXI.

En los últimos años se han realizado muchas pruebas piloto relacionados con la renta básica y sus efectos en la población, en lugares de una gran variedad cultural como Finlandia, Ontario (Canadá), Madhya Pradesh (India), Oakland (California, Estados Unidos), Kenia, Holanda, entre otros.

Cada uno con sus peculiaridades. A pesar de que algunos de ellos sean muy mediáticos, no siempre cumplen con todas las características de una renta básica. Por ejemplo, el de Finlandia.

Durante los años 2017-2018 el gobierno finés seleccionó aleatoriamente a 2000 desempleados de edades comprendidas entre los 25 y los 58 años para otorgarles de manera incondicional un pago periódico de una cantidad de 560€ al mes. Sin la posibilidad de la retirada del pago en caso de encontrar empleo y sin eliminar el resto de prestaciones sociales que ya recibiesen de antes. A la vez, se compararían con un grupo de 173.000 parados que continuaban recibiendo la prestación (Lu, 2020).

Este experimento tenía el objetivo de comprobar el efecto de un pago incondicional en los incentivos laborales, en un contexto de cambios en la vida laboral. Por tanto, y a pesar de la incondicionalidad, no cumpliría el requisito de universalidad, pues uno de los requisitos para ser receptor, era la de tener la característica de ser desempleados.

Sin embargo, muchos defensores consideran que los experimentos pilotos están muy limitados a lo hora de ilustrar los efectos sociales de la implantación de una renta básica. Debido a que las cantidades solo se entregan a un número reducido de personas, y no al conjunto de la sociedad, no se podrían apreciar los efectos sociales, referente por ejemplo, al aumento del poder de negociación de los grupos más desfavorecidos. No se podría analizar los efectos fiscales, el cambio de vida y cultura de la población, el efecto sobre los salarios, etc (Raventós, 2019).

También, como los receptores están aislados de otros, no se pueden percibir los efectos agregados. La duración temporal definida del experimento no permite extrapolar al largo plazo: la planificación vital es distinta si la renta básica se recibe durante un periodo corto de tiempo o durante toda la vida.

Los experimentos solo podrían ilustrar aspectos muy parciales. Principalmente, los relacionados con la nueva actitud ante el trabajo y el empleo remunerado.

En agosto de 2020, la asociación berlinesa “Mi ingreso básico” impulsó el proyecto piloto de una renta básica en Alemania. El piloto está previsto iniciarse en la primavera del 2021 (Barrena, 2020).

De manera incondicional y sin ninguna restricción, se abonará a 120 voluntarios un ingreso mensual de 1200€ durante tres años, a la par que se estudiará a 1380 personas que no serían receptoras.

El proyecto tendrá un coste de 1.7 millones de euros al año. El objetivo es investigar los efectos del ingreso básico en los receptores y realizar una comparativa con personas que no se beneficiarán del mismo. El experimento estará supervisado por el Instituto Alemán de Estudios Económicos.

Las críticas dudan de su validez del proyecto: en primer lugar, al estar limitado a tres años, no se observarán los efectos a largo plazo. Además, el reducido número de participantes, y que el proceso de selección sea por voluntarios, hacen que la muestra no sea representativa.

También, el gobierno de Merkel ha criticado la idea. Concretamente, el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, y de Trabajo, Hubertus Heil consideran inviable trasladar el modelo a gran escala, pues entregar la cantidad propuesta a los 83 millones de habitantes de Alemania, tendría un coste anual de casi un billón de euros anuales.

4. Debate

En esta sección se expondrán los principales argumentos con los que se defiende y rechaza la renta básica. En primer lugar, se expondrán los que muestran un apoyo a la idea, y posteriormente, los que la rechazan.

4.1. Argumentos a favor

En los próximos apartados, se mostrarán los mayores argumentos a favor de la renta básica universal. Fundamentalmente, destacan los relacionados con la libertad que otorgaría y las justificaciones éticas. No obstante, muchos defensores añaden que la renta básica traería una serie de beneficios económicos y sociales, una mejora del trabajo, y una preparación contra el cambio tecnológico. En el último apartado, se presenta un modelo de financiación que justifica los principios de libertad y justicia desarrollados.

4.1.1. Renta básica y libertad

Los defensores de la renta básica afirman que sería un instrumento que aumentaría la libertad de los individuos. Aunque es necesario explicar a qué libertad se refieren y cómo se materializa, pues las diferentes ideologías existentes, explican la libertad de distinta forma.

Comenzando por los pensadores de ideas libertarias. Estos creen que la intervención del gobierno es intrusiva e infringe la libertad individual. La libertad la entienden como ausencia de interferencias. Por ello, una renta básica se complementaría con una reducción de la intervención del gobierno y en el gasto en políticas sociales (Standing, 2018).

Un exponente de esto es el filósofo Robert Nozick (Según él, una sociedad libre y justa se fundamenta en el derecho de propiedad que los individuos tienen sobre sí mismos (o autopropiedad). Como la economía, las políticas de redistribución de recursos, o los impuestos son injustos y no reconocen la autopropiedad de las personas, sería necesario una mínima intervención para garantizar la protección de los intercambios y el derecho a los bienes bien adquiridos. Una distribución justa es aquella que resulte del intercambio libre entre las personas. Por ello, la intervención del Estado en los intercambios es incompatible con el reconocimiento de las personas como propietarias de sí mismas (Mundó, 2004).

Sin embargo, existen otros libertarios que defienden la renta básica como una alternativa a las políticas sociales, más limitadoras de la libertad individual. Charles Murray ejemplifica con una persona drogodependiente que los beneficios de la renta básica serían superiores a las prestaciones sociales. Esa persona, ya no tendría que depender de ayuda externa, o de la intervención de distintas organizaciones, para sobrevivir, pues con un ingreso periódico, podría actuar por sí mismo para mejorar (Standing, 2018).

Estos planteamientos son paternalistas, pues animan a realizar comportamientos considerados correctos en función del pensamiento de cada individuo. Además, obvia la posibilidad de que los receptores acaben tomando decisiones consideradas incorrectas o malas para el individuo o la sociedad.

También se ignoran las características no relacionadas con la libre elección. En esas situaciones seguiría faltando una atención y una responsabilidad social. Existen mecanismos públicos que ofrecen una gran ayuda y que no limitan la libertad individual. Por ejemplo, la sanidad pública o las pensiones por incapacidad permiten dar más libertad e igualdad a aquellos que sin esos mecanismos no las tendrían.

Esta concepción de la libertad entiende como libre tanto a aquel que posee bienes que le permite decidir de forma autónoma sobre su vida, como aquel que no los posee y depende de otro para obtener los medios necesarios para vivir. Es decir, aun estando en un sistema que garantiza el libre intercambio de propiedades, existen importantes asimetrías sociales (Mundó, 2004). Aquí entraría la concepción republicana de la libertad, que es la que interesa a muchos defensores de la renta básica y que difiere en gran medida de las ideas libertarias.

El republicanismo es un pensamiento político con más de 2.300 años de historia que se fundamenta en que la libertad no está separada de las condiciones materiales de existencia. La propiedad cobra entonces un aspecto fundamental (Raventós, 2011).

El republicanismo entiende la propiedad como el control del recurso poseído que confiere independencia material. Por ello, una persona que no tuviese una base material o propiedad que asegurase su existencia haría que dependiese de otros particulares para sobrevivir, y, por tanto, no sería sujeto de derecho propio y no sería libre.

En el pensamiento republicano, una persona es libre si puede vivir por sus propios medios (que derivan de una existencia social autónoma garantizada), sin depender de otros para vivir. Por tanto, no podrían existir interferencias ilícitas en la propiedad de una persona que conllevara la pérdida de su existencia social y su autonomía; y quedase a dependencia de terceros. No obstante, el Estado sí podría interferir si existiesen desigualdades. Es decir, estas intervenciones sí serían lícitas, y serían obligatorias para que se garantizase la libertad republicana a todos los ciudadanos.

Con relaciones de dominación y sin independencia material, no es posible ni la ciudadanía plena, ni la libertad. Puesto que los que no tengan independencia material están sujetos a interferencias de los que sí la tienen. De la misma forma, tampoco podrían ser posibles si la propiedad estuviese distribuida de forma muy polarizada, ya que podría darse la situación en la que unas pocas personas tuviesen las condiciones materiales para interferir en la sociedad. En la actualidad, grandes propietarios tienen la capacidad de moldear mercados y economías mundiales; imponer condiciones de producción e influir en decisiones políticas (Raventós, 2019).

Cuando se habla de libertad e igualdad, los republicanos no lo conciben como una igualdad de recursos. Para ellos, la libertad e igualdad es el resultado de una existencia social garantizada. Gracias a la independencia material garantizada, el Estado reconoce la igualdad civil y otorga el estatus de ciudadanos a todos los miembros.

Para medir la libertad en una sociedad sería importante analizar las relaciones entre la gente con la existencia material garantizada y la dependiente de otros para la existencia. Esta distinción surge de cómo se estructura y divide la sociedad según los republicanos: en base a la propiedad. Esto quiere decir que, a pesar de que existan diferentes interferencias que limitan la libertad individual, tienen más atención aquellas que están relacionadas con los derechos de propiedad, pues marcan la sociedad.

Este pensamiento tiene una larga tradición histórica. Autores como Demócrito, Aristóteles, Cicerón, Maquiavelo, John Locke, Rousseau, Adam Smith, Robespierre, o

Karl Marx, entre muchos otros; se pueden relacionar con este tipo de ideas (Raventós, 2011).

El republicanismo se distingue entre republicanismo histórico y neorepublicanismo académico. El histórico se divide en democrático y oligárquico (o no democrático). Ambos republicanismos históricos comparten la idea de que la propiedad y los medios de existencia son necesarios para la libertad. Sin embargo, mientras que el democrático busca la integración en la ciudadanía de todos los miembros, el oligárquico excluye a los no propietarios. El democrático quiere universalizar la libertad y que toda la población tenga garantizada las condiciones de existencia, el oligárquico, solo a una parte de la población, a los propietarios.

Por el contrario, el neorepublicanismo académico entiende que la libertad sería la ausencia de interferencias arbitrarias de otros. Frente al republicanismo histórico, que mantiene que la vulnerabilidad provocada por la ausencia de independencia material es motivo de interferencia. Por tanto, las relaciones entre libertad, propiedad y democracia no están tan marcadas.

El pensamiento republicano histórico democrático se ve reflejado en las ideas del jurista y político de la Revolución Francesa, Maximilien Robespierre (1758-1794).

Para Robespierre, la propiedad es un derecho a disfrutar y a disponer de los bienes que garantiza la ley, y, como cualquier otro derecho, no puede interferir en el resto de derechos. En consecuencia, la propiedad debería estar limitada para no perjudicar ni la libertad, ni la existencia social, ni la seguridad. Eso incluye las desigualdades económicas provocadas por los grandes propietarios que atentan contra la libertad. Por ello, el derecho a la existencia material debería estar garantizada a través de la propiedad por el Estado (Raventós, 2011).

La renta básica estaría justificada en base a la libertad republicana porque los receptores obtendrían una base material que les aportaría la libertad para no depender de terceras personas. Al tener unos ingresos regulares por encima del umbral a la pobreza, toda la población tendría la existencia material garantizada. Además, sería una medida que no atentaría contra la libertad de comportamiento, pues no se impondrían condiciones para su obtención o uso (Raventós, 2019)

Existen mejoras generales y cotidianas, pero no por ellos son menos importantes. Por ejemplo, una persona tendría más oportunidades para emprender, al contar con una seguridad financiera que disminuiría el riesgo a la hora de iniciar un negocio, y que le otorgaría unos ingresos regulares en épocas de pérdidas y bajos beneficios. También, podría buscar un empleo a tiempo parcial, e incluso dejar el actual, para dedicarse a trabajos no remunerados, evitando además el riesgo de muchos subsidios actuales. Del mismo modo, podría dedicarse al hogar, tener hijos, aprender nueva formación, etc (Standing, 2018).

No obstante, son muchos grupos que son susceptibles de interferencia social en su existencia por parte de otros, ganarían una gran libertad e independencia económica que actualmente no disponen (Raventós, 2011).

Los trabajadores asalariados ganarían la capacidad de elegir y rechazar cualquier oferta de empleo en base a sus preferencias y gustos personales en vez de sus necesidades financieras, incluso la de dedicarse a otro tipo de actividades no remuneradas, como al trabajo doméstico o al voluntario. En consecuencia, la existencia social de los trabajadores dejaría de estar ligada a la venta de la fuerza de trabajo a cambio de un salario con el que se obtienen los medios de subsistencia.

El poder de negociación de la clase trabajadora aumentaría. Se eliminaría la actual disyuntiva entre elegir un empleo mal remunerado y con pobres condiciones, frente a quedarse en paro. Desaparecería el poder disciplinador del desempleo, que es mayor cuando mayor es el desempleo, y que provoca que a mayor posibilidad de quedarse en paro, mayor es la disposición a aceptar un empleo con peores condiciones. Gracias a la seguridad económica garantizada, se reducirían las asimetrías en las relaciones de los empleadores y los empleados, y estos últimos tendrían una mejor situación a la hora de buscar y seleccionar un trabajo remunerado (Raventós, 2019).

Las mujeres son otro grupo que se beneficiaría enormemente.

En el ámbito del hogar, la renta básica aportaría más autonomía financiera y personal a quienes se dedican al trabajo doméstico y por ello no obtienen remuneración económica, tradicionalmente, este grupo lo ocupan mayoritariamente las mujeres. Además, aumentando la importancia al trabajo doméstico (Torres López, 2019).

Para Raventós (2011), la libertad republicana para las mujeres estaría lograda gracias a la renta básica, pues otorgaría la existencia social a un gran grupo que actualmente de forma mayoritaria dependen de su pareja masculina.

La renta básica respondería a los cambios sociales en los modelos de convivencia, en referencia al crecimiento de las familias monoparentales encabezadas por mujeres.

La individualidad de la renta básica daría más autonomía a las mujeres casadas, dado que los subsidios que utilizan a la familia como unidad de asignación, suelen ser recibidos por los hombres. También sería una superación del sistema de seguridad social en los países desarrollados dado que se basaba en que las mujeres eran dependientes de los maridos y eran estos los que aportaban económicamente para el beneficio de ambos (Raventós, 2019).

La autonomía obtenida se traduciría en un aumento del poder de negociación de las mujeres en el hogar, un mayor equilibrio en las relaciones y evitaría que fuesen dominadas por sus parejas. Además, esto sería aún más positivo para aquellas en situación de violencia de género, dado que la nueva autonomía que ganarían ayudaría a que pudiesen escapar de esas situaciones con bastante más facilidad (Torres López, 2019).

Otro grupo en situación precaria que se beneficiaría enormemente es el colectivo LGBTI. De hecho, por el motivo del Orgullo 2020, 55 organizaciones y 260 personalidades públicas firmaron un manifiesto defendiendo la renta básica universal. Además de beneficiar a toda la población, su implantación haría que el colectivo obtuviese algo que lleva reclamando desde hace años: el derecho a ser y existir. En la actualidad, esto no se cumple porque, entre otros muchos motivos, muchas personas LGTBI están en situaciones de marginación, y en muchos países es ilegal serlo, incluso bajo pena de muerte. A nivel mundial, la esperanza de vida es de 44 años. Las personas transgénero sufren un desempleo estructural del 85% en España y muchas veces, abocado a la prostitución. Para ellos, la renta básica sería un instrumento de solidaridad, de justicia social, que reduciría la desigualdad y la discriminación gracias a la universalidad, y garantizaría el derecho a la existencia (Autores Varios, 2020).

El paternalismo de muchas medidas es superado por la renta básica debido a que no se exige ninguna forma de comportamiento, y no impone condiciones a ciertos grupos que no son impuestos a otros (Standing, 2018).

El pensamiento republicano no niega que los receptores pudiesen realizar actividades consideradas socialmente nocivas. Sin embargo, no establece que el Estado debería

imponer concepciones supuestamente buenas y correctas, sino que debe garantizar una base material, con la que las personas tendrían la capacidad de desarrollar la virtud cívica o la capacidad de auto gobernarse en su vida privada (Raventós, 2011).

La renta básica sería necesaria, pero no suficiente, para poder garantizar una libertad plena. Se ha mencionado anteriormente que la libertad no se podría garantizar si un grupo tuviese las condiciones materiales para interferir arbitrariamente en la existencia social de muchas personas. En consecuencia, otras medidas políticas y económicas serían fundamentales. Por estos motivos, muchos defensores no son partidarios de reducir la trascendencia del Estado del bienestar. No ven la renta básica como la solución definitiva a todos los males del mundo, sino como una medida útil a la hora de acercarse a la libertad. Un instrumento superior a muchos actuales, enfocados más a la coerción y a la imposición de comportamiento.

Guy Standing reflexiona sobre la libertad de la renta básica y cómo su capacidad emancipadora sería superior a los costes de su implantación (Standing, 2015).

Entre 2010 y 2013 se realizó un experimento de renta básica a gran escala en el estado Indio de Madhya Pradesh. 6000 hombres, mujeres y niños repartidos en nueve pueblos distintos recibieron periódicamente un ingreso mensual durante 12-18 meses para evaluar el impacto de la renta básica en comparación con pueblos de características similares donde no se habían entregado los ingresos.

El dinero era un producto escaso para aquellas comunidades y familias. Esas personas con baja renta solían recurrir a deudas con altos intereses y de baja antelación para adquirir bienes de primera necesidad o cubrir gastos imprevistos, evitando el ahorro e inversiones a largo plazo.

Con la nueva liquidez y seguridad obtenida gracias a la renta básica, ganan la capacidad de ser más estratégicos en su toma de decisiones, ahora tienen más libertad en cómo, cuándo y dónde gastar sus ingresos. Al reducirse la escasez del dinero, el riesgo en las transacciones monetarias disminuía, produciendo una reducción en el coste de los créditos (Standing, 2015).

En consecuencia, se solicitaban menos créditos, además, a unos intereses menores. El endeudamiento para comprar productos básicos como comida disminuía. Crecían las inversiones en inputs productivos como semillas y fertilizantes. Las transferencias sin intereses entre familias o vecinos para cubrir las necesidades surgidas de los shocks y el azar aumentaban.

Es decir, al disminuir el coste del dinero, el poder de emancipación es mayor. El impacto positivo era mucho mayor que el que podría haberse esperado únicamente con el importe mismo de la renta básica. Es por ello que su valor emancipador es superior a su coste. La gente ya no tenía que depender de las deudas para sobrevivir, ahora ya podía ahorrar, planificar, invertir y tomar decisiones con más libertad.

El valor emancipador no solo era financiero, también social. De forma anecdótica, Standing (2015) cuenta como la renta básica ayudó a contrarrestar la imposición cultural de llevar velo porque las mujeres jóvenes dejaron de llevarlo al poder tomar sus propias decisiones que les permitieran participar libremente en el pueblo, al no tener que depender económicamente de otras personas.

4.1.2. *La justicia de la renta básica*

La renta básica plantea un dilema sobre libertad y justicia al entregar dinero de forma incondicional y sin reciprocidad. También, su elevada financiación obligaría a detraer recursos de población que podría no estar tan interesada en la implantación.

Para los defensores, la idea de justicia inherente a la renta básica es superior a ser una medida de política económica y social. Es decir, la reducción de la pobreza y el desempleo, entre otros, son consecuencias interesantes que también se persiguen y defienden, pero es en el aspecto ético y moral de la renta básica, y en su búsqueda de justicia y libertad, donde reside su mayor atractivo y razón de existencia (Raventós, 2019).

Philippe van Parijs, filósofo defensor de la renta básica, basa la justificación ética de la renta básica a través de tres principios: la teoría de la justicia de John Rawls, el pensamiento de Ronald Dworkin y las ideas sobre la propiedad y la herencia social (Torres López, 2019).

John Rawls plantea su teoría de la justicia como una superación a la idea de una sociedad justa para el utilitarismo, que es cuando las instituciones sociales estarían dispuestas de modo que otorgan el mayor equilibrio neto de satisfacción distribuido entre todos los individuos. Rawls critica su falta de respeto a los individuos, pues no se considerarían de derecho propio y solo sería una parte en la utilidad total, pudiendo llegar a encontrarse a niveles bajos de satisfacción, a pesar de que la sociedad estuviese en un nivel máximo (Caballero, 2006).

En consecuencia, Rawls basa su Teoría de la justicia en dos principios:

- Principio de igualdad en la distribución de las libertades. Cada persona debería tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas, y que sea compatible con un esquema similar de libertades para los demás.
- Principio de diferencia. Las desigualdades económicas y sociales se podrían admitir si beneficiasen razonablemente a toda la sociedad, especialmente a los menos aventajados; y se vinculasen a empleos accesibles para todos y en condiciones de igualdad de oportunidades.

Dando mucha importancia a la imparcialidad, a la sociedad y a la equidad, considera que las ideas de justicia que se establezcan de acuerdo entre personas racionales, libres e iguales, y en una situación justa, deberían contar con una validez universal e incondicional. Es decir, independientemente de la posición social que ocuparía un individuo, los principios estarían diseñados desde el primer momento para que no beneficiase ni perjudicase a nadie.

Partiendo de la teoría de Rawls, el filósofo Ronald Dworkin la desarrolla en tres aspectos significativos, comenzando en el reparto de derechos. Para empezar, se debería atender tanto las decisiones y las preferencias de los seres humanos, como las circunstancias impuestas, al no ser consecuencia de la elección de las personas. Por ello, las condiciones de aquellos con menos capacidades requerirían de una especial atención. Para Dworkin, la solución ideal sería que todos tuviesen los recursos materiales imprescindibles para satisfacer los intereses generales, en vez de perseguir una igualdad en los recursos. La justificación se encontraría en que los beneficios para compensar a aquellos que están en peores condiciones, serían superiores a su coste (Torres López, 2019).

Respecto a las ideas sobre la propiedad y la herencia común, anteriormente se han comentado las ideas de Thomas Paine y su relación con la renta básica: que la tierra sin cultivar fue propiedad común de toda la raza humana, y su privatización provocó la

pérdida de unos derechos naturales a gran parte de la población. Por ello, los propietarios deben a la comunidad una renta para compensar dicha pérdida. Cabe mencionar que en su plan no se distinguiría entre la riqueza de los perceptores, pues Paine no veía el pago como una misericordia a los pobres, sino como un pago universal, un derecho correspondiente a la herencia natural (Standing, 2018).

En “La conquista del pan”, el filósofo Pjotr Kropotkin (1892) hablaba de las riquezas de las sociedades civilizadas como un producto conjunto del trabajo manual e intelectual del pasado y del presente. El desarrollo de la humanidad, la agricultura, la ciencia, la industria, el pensamiento, etc, no es sino el resultado del trabajo del esfuerzo y trabajo de miles de personas de generaciones pasadas y futuras. Por tanto, toda la riqueza se debería traducir en un bienestar para todos, acabando con la pobreza, provocada por la privatización y el acaparamiento de la riqueza (Kropotkin, 1892).

John Locke consideraba imprescindible el derecho a la propiedad para que los seres humanos tengan acceso a una autonomía propia. Además, teniendo en cuenta que la propiedad es resultado de la utilización de la propiedad colectiva, sería necesario, por tanto, establecer algún tipo de compensación a quienes han sido privados de la utilización y disfrute de los recursos comunes, a pesar de ser herederos naturales (Mundó, 2004).

Todas estas ideas justificarían la renta básica como un retorno de la propiedad común de los medios naturales para la subsistencia, actuando como un derecho al uso de dichos medios; y como un ingreso pagado desde la riqueza social y colectiva creada por la humanidad. Por todo esto, se puede apreciar como algunos defensores utilizan el término “dividendo social” para reflejar ese pago desde la propiedad común y la riqueza colectiva (Standing, 2018).

No obstante, estos tres principios no permitirían justificar una renta básica universal, al plantearse bajo ideas de reciprocidad o compensación. Philippe van Parijs reformula dichos principios para argumentar la implantación de una renta básica (Torres López, 2019).

Para van Parijs, una sociedad es libre y justa si dispone de una estructura jurídica que dota de derechos a todas las personas y si se garantiza que no se agreden los derechos de cualquiera. Estas dos primeras condiciones derivan de los principios de Rawls. También, para el disfrute de la libertad debería existir una capacidad real efectiva, no sería suficiente solo con la formulación de los derechos. El problema radicaría en determinar el equilibrio entre estas tres condiciones y en cómo se aumentarían las capacidades de los que menos recursos tienen, sin contradecir los dos primeros elementos.

Para empezar, según él, los recursos presentes están compuestos directamente del esfuerzo y el trabajo propio, y de unos recursos externos y comunes desigualmente distribuidos: los recursos naturales y las herencias.

La renta básica sería el resultado de repartir esa propiedad común que está incorporada a otros bienes, y que provoca que todos los sujetos no puedan disfrutar de todos los recursos por igual. Por tanto, una renta básica universal financiada por una redistribución fiscal otorgaría una capacidad efectiva a los ciudadanos para que disfrutasen de una libertad real, sin impedimentos ni interferencias de terceros, cumpliendo el último de los criterios.

La renta básica por sí misma no ayudaría a lograr una justicia social. Sin embargo, gracias a sus propiedades, sería de gran utilidad, especialmente si se combinase con otras medidas contra la discriminación y que fortalezcan la voz de los grupos más desventajados (Standing, 2018).

La individualidad haría que se redujese la dependencia financiera en hogares con relaciones poco equitativas, aunque no se eliminarían todas las desigualdades estructurales en el hogar. Una persona en dicha situación recibiría la cuantía de forma individual, en vez de la persona con poder en la relación, como sucede con prestaciones que están basadas en la situación familiar.

Gracias a la universalidad, la renta básica se recibiría antes de la aparición de la necesidad de una seguridad económica, evitando la estigmatización social que provocan algunas ayudas y eliminando la desprotección temporal provocada por la lenta gestión de los trámites burocráticos de las administraciones.

La incondicionalidad provocaría que no se impusiesen ninguna condición de comportamiento, siendo una medida más justa que los subsidios condicionados, al imponerse una serie de restricciones que únicamente tienen que cumplir los receptores, cuando el resto de la población no tiene que hacerlo.

Sin embargo, aún quedaría por justificar el origen de la financiación, ya que implicaría una gran corrección de recursos para que la renta básica fuese una realidad.

Para Van Parijs, la solución consistiría en recurrir a otras fuentes de ingresos comunes y valiosos. Debido a que la imposición en la herencia social podría ser insuficiente, se utilizarían los resultados del trabajo. Tras considerar el trabajo como un recurso común, escaso y mal repartido, por encontrarse en una sociedad en la que haya gente que no pueda disfrutar de un empleo remunerado porque la productividad no garantiza el pleno empleo (Torres López, 2019).

En relación a lo anterior, Guy Standing (2018) añade que la renta básica sería una medida ecológica interesante contra la degradación medioambiental. Él utiliza el término “dividendos verdes” para describir los pagos como una manera de compensar, de forma equitativa, por los costes de la contaminación. Esto es, como una cuestión de justicia social.

Los gobiernos podrían implantar impuestos sobre actividades contaminantes para desalentar su uso y provocar una disminución de las emisiones de gases invernaderos. Aunque tendrían dificultades políticas, pues esas medidas conllevarían un impacto regresivo por el hecho de incrementar los precios de los bienes comprados en hogares de rentas bajas. Lo recaudado podría utilizarse para cubrir otras externalidades y sufragar los dividendos verdes. Encontrándose aquí una forma de financiación, justificada sobre principios de justicia social. Gracias a la renta básica, se solucionaría ese problema político (Standing, 2018).

También, incentivaría a los receptores a implicarse con la sociedad a través de formas de trabajo valiosas. Los ciudadanos con menor renta, y el resto de la sociedad, saldrían más beneficiados, en términos económicos y ecológicos, en una sociedad con menor contaminación y mayor salud.

La justificación de una renta básica universal e incondicional surge de ser una medida que otorgaría libertad real, y un mecanismo para que las posibilidades y oportunidades de la gente fuesen más equitativas y más justamente distribuidas. Todas las razones anteriores hacen que con su implantación no se necesitaría una reciprocidad, por ejemplo, con la realización de alguna actividad social. Se otorgaría meramente por el hecho de ser humano. Además, sería un instrumento de justicia social y reflejaría la riqueza social. Siendo todos estos motivos las principales justificaciones éticas para su defensa e implantación.

4.1.3. Argumentos económicos

La implantación de la renta básica aportaría una serie de beneficios económicos y sociales. Aunque para muchos defensores ya estaría justificada por su justicia y su libertad, también consideran de gran importancia los argumentos que se exponen a continuación. Estos están relacionados con la reducción de la pobreza y la desigualdad y el crecimiento económico.

Nuevo tipo de política social frente a la pobreza y la exclusión

La renta básica sería un nuevo tipo de política social frente a la pobreza y la exclusión debido a que los sistemas de protección social estaban basados en contextos que no tienen vigencia en la sociedad presente (Torres López, 2019).

En la actualidad, existen elementos que han creado problemas más abundantes y complejos que los que se producían en las sociedades del bienestar en las que se concibió la política social que hoy se sigue disfrutando.

Las características de la política social tradicional hacen que esté limitada a la hora de lidiar con las nuevas situaciones sociales y sus problemas. Mientras que esa política se diseñó, entre otras condiciones, con la idea de la posibilidad de alcanzar el pleno empleo, el crecimiento continuo de la productividad y la economía y tipologías familiares estables; en la actualidad hay precariedad, paro, incertidumbre económica, y modelos familiares muy diversos. Por tanto, sería necesario una nueva política que se adaptase a las nuevas necesidades.

La individualidad de una renta básica evitaría los problemas que acompañan a las ayudas familiares, debido a que es difícil determinar si aquellos que conviven en grupo tienen diferentes necesidades que quienes lo hacen individualmente.

La renta básica sería un nuevo tipo de política social emancipadora porque además de que ayudaría con los problemas económicos de los sujetos, les situaría en una nueva posición, pues se actuaría antes de la aparición de la necesidad de ayudas económicas externas, garantizando la existencia material y no atentando a la libertad efectiva, como hacen las medidas que actúan a posteriori de la necesidad, y que provoca un espacio de tiempo de desprotección e inseguridad.

Los subsidios condicionados también tienen ciertas limitaciones que serían superadas gracias a la renta básica y su incondicionalidad.

Existe un desincentivo al empleo remunerado cuando se es perceptor de un subsidio condicionado, pues implicaría la pérdida del subsidio, esto se denomina trampa de la pobreza. En contraste, por la condición de incondicionalidad de la renta básica no existiría tal desincentivo, pues la búsqueda o realización de un empleo remunerado no conllevaría la supresión de la renta básica (Raventós, 2019).

En relación anterior, los subsidios condicionados estimulan el fraude fiscal de la economía sumergida, existiendo el incentivo para los receptores de aceptar trabajos en ese ámbito para recibir los ingresos, tanto dicha actividad, como del subsidio condicionado. Esto es perjudicial a largo plazo, al imposibilitar el acceso de los receptores a futuras pensiones de jubilación o a prestaciones por desempleo. Aunque dado que para muchos en situación precaria, les es más beneficioso a corto plazo obtener esas dos rentas, que sufrir las desventajas (Torres López, 2019).

Por ello, la renta básica superaría la ineficiencia, la precariedad y la trampa de la pobreza provocadas por los subsidios condicionados.

Los subsidios condicionados conllevan unos elevados costes de gestión y administración debido al control, en primer lugar, en el momento de determinar si los posibles perceptores cumplen con los requisitos legales para la obtención del subsidio; y en segundo lugar, a la hora de evaluar si siguen cumpliendo las condiciones y controlar el uso que hacen de él (Raventós, 2019).

La estigmatización social es otro efecto importante de los subsidios condicionados. Aquellos que necesitan dichas ayudas, pueden estigmatizarse por su condición de persona con bajos recursos, llegando incluso a no solicitarlas para no ser marcados socialmente.

La renta básica y su universalidad e incondicionalidad no implicaría este control para determinar quién debe o no recibir la ayuda, ahorrando los elevados costes y superando esa ineficacia derivados de los subsidios condicionados y su estigmatización.

Existe una problemática relacionada con los subsidios condicionados sobre que no se cumplen los objetivos propuestos y que la cobertura podría no ser suficiente, es decir, no alcanzaría a toda la población que podría ser beneficiada. Un buen ejemplo de esto es el modelo de rentas mínimas condicionadas de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).

Instaurado desde 1989, este modelo, que nació con el objetivo de acabar con la pobreza, se despliega en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y Ayudas de Emergencia Social (AES). Uno de sus logros conseguidos fue que los niveles de pobreza de la CAV fuesen muy inferiores al resto de Comunidades Autónomas de España (Uribarri, 2017).

Sin embargo, la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del País Vasco (EPDS), que elabora el Gobierno Vasco desde finales de los años 80, refleja un retroceso en la consecución de los objetivos (Figura 1).

Figura 1. Impacto del sistema RGI/PCV/AES en la prevención de la pobreza

	2008	2012	2014	2016
Porcentaje de la población de la CAV que es atendida en el sistema	3,9%	6,1%	7%	6,3%
Porcentaje de personas en riesgo de pobreza atendidas en el sistema	63,6%	72,6%	72,9%	69,3%
Porcentaje de la población de la CAV que ha superado la pobreza gracias a las prestaciones	1,9%	3,2%	3,7%	3,3%
Porcentaje de receptores que sigue en	50,8%	48,3%	45,9%	46,9%

situación de pobreza				
-------------------------	--	--	--	--

Fuente: elaboración propia a partir de Urribarri 2017 y EPDS-2016 (Gobierno Vasco, 2017)

En 2016, año de crecimiento de PIB, empleo y alejado de la Gran Recesión (2008-2013); el sistema dejó fuera al 30,7% de personas en riesgo. Y solo una parte de los que accedieron, continuaron en esa situación de pobreza, representando el 46,9% de la población beneficiada.

Según el economista Iñaki Urribarri (2017), estos datos reflejan la necesidad de un nuevo modelo. Por ello, defiende la renta básica universal, al ser una medida que permitiría alcanzar a toda la población de forma incondicional, evitando las ineficiencias provocadas por los criterios de asignación y por el sistema de entrega familiar.

El defensor de la renta básica, Guy Standing (2018) propone una serie de principios para determinar si una política para afrontar la crisis, la inseguridad o la pobreza sería justa desde el punto de vista social:

- Principio de diferencia de seguridad: una política es socialmente justa solo si mejora la seguridad de los grupos menos seguros de la sociedad.
- Principio del test de paternalismo: una política es socialmente justa solo si no impone controles sobre ciertos grupos que no son impuestos al mismo tiempo sobre los grupos más libres de esa sociedad.
- Principio de «derechos sí, caridad no»: una política es socialmente justa si mejora los derechos de los receptores y limita el poder discrecional de los que proporcionan la prestación.
- Principio de restricción ecológica: una política es socialmente justa solo si no impone un coste ecológico sobre la comunidad.
- Principio del trabajo dignificado: una política es socialmente justa solo si no impide que la gente busque un trabajo de forma digna y si no coloca en situación de desventaja a los grupos más inseguros.

Gracias a estos principios, permite comparar la renta básica con distintas políticas sociales que a menudo se proponen como alternativa y que están activas en algunas de las economías desarrolladas del mundo (Figura 2).

Figura 2. Comparación de distintas políticas sociales a través de los principios de justicia social de Standing.

	Diferencia de seguridad	Test de paternalismo	«derechos sí, caridad no»	Restricción ecológica	Trabajo dignificado
Salario mínimo legal y salarios de subsistencia	×	✓	✓	—	—
Seguridad social	×	✓	✓	—	—
Asistencia social condicionada con comprobación de recursos	×	×	×	—	×

Bienes subvencionados, cupones, etc.	×	×	×	—	—
Trabajo garantizado	×	×	×	—	×
Créditos fiscales	×	✓	✓	—	×
Impuesto negativo sobre la renta	×	✓	✓	—	×
Caridad privada	×	×	×	—	×
Renta básica	✓	✓	✓	✓	✓

Fuente: (Standing, 2018)

La renta básica universal cumpliría los cinco criterios. Mejora la seguridad de los receptores al otorgarles una cantidad básica suficiente para garantizarles la libertad efectiva. Su incondicionalidad haría que no se estableciesen controles y restricciones de comportamiento a ningún grupo de la sociedad. También, junto a la universalidad, los prestadores no tienen un extenso poder sobre los receptores. La renta básica podría conducir a un crecimiento más sostenible que ecológico, junto con una mejora de las condiciones de los empleos, que no perjudica a ningún grupo.

Reducción de la pobreza, la desigualdad y la inseguridad

Para sus defensores, una renta básica universal bien diseñada sería la mejor medida para reducir la pobreza y la inseguridad económica por su transparencia, para la manera de actuar y por sus costes administrativos relativamente bajos (Standing, 2018).

En España, el mercado de trabajo, las políticas fiscales poco redistributivas y la vulnerabilidad frente al cambio tecnológico, configuran un escenario en el que la desigualdad y la pobreza pueden hacerse crónicas (Martín Carretero, 2019).

Trabajadores pobres, hogares con hijos en situación de pobreza, paro, desigualdad laboral en el acceso al empleo y a los salarios, desigualdad generacional o altas tasas de temporalidad en grupos de edad jóvenes son algunos de los patrones de desigualdad que han surgido en los últimos años.

Actualmente en España, ni siquiera un empleo remunerado garantiza estar fuera del nivel de la pobreza. Antes de la crisis del coronavirus, el 13% de los trabajadores estaban por debajo de la línea de la pobreza según la Organización Internacional del Trabajo (de la Fuente, 2020).

Al inicio de la crisis, el sector poblacional con mayor tasa de pobreza relativa eran los mayores de 65 años. En 2017, los menores de treinta ocupaban la primera posición. Por tipo de hogar, los que no tuviesen niños dependientes eran los que menor tasa de pobreza relativa tenían. Esto provoca que un niño que crece en condiciones de pobreza, estaría en un contexto socioeconómico que influiría negativamente en su futuro profesional, pues tiene más probabilidad de obtener peores rendimientos académicos y de abandonar los estudios (Martín Carretero, 2019).

Existe una alta precariedad debido a la devaluación salarial, a la temporalidad y a la parcialidad en el empleo. Para los sindicatos, los salarios son bajos respecto al nivel de vida. A partir de la crisis de 2008, el desempleo aumentó hasta alcanzar un 26,9% en 2013. La reforma laboral de 2012, entre otros aspectos, abarató el despido, priorizó los convenios de empresa, y flexibilizó la organización del trabajo para los empresarios. Lo que agravó la precariedad y la contratación temporal (de la Fuente, 2020).

Según el INE, en el año 2018 el salario bruto más frecuente era de 18.468,96€, el salario mediano, era de 20.078,44€ y el salario medio, de 24.009,12€ (INE, 2020).

Al conferir a todos los ciudadanos una renta básica universal de una cantidad superior al umbral a la pobreza, en el momento de su implantación, la pobreza quedaría erradicada (Raventós, 2019).

Con una renta básica, aumentaría la seguridad financiera de cada individuo, al otorgar unos ingresos básicos de forma periódica y que ayudarían a reducir la incertidumbre económica.

Crecimiento económico

La mayoría de los defensores opinan que una renta básica contribuiría a un mayor crecimiento económico sostenible, debido a que un dinero adicional que fluyera hacia la economía incrementaría la demanda agregada, si no hubiese otras restricciones a la oferta, impulsando el crecimiento económico (Standing, 2018).

Esto es especialmente relevante en las personas con rentas bajas, pues su capacidad de compra aumentaría y son estas las que tienen una mayor propensión a gastar el dinero que reciben.

Además, una renta básica podría disminuir la restricción en la balanza de pagos asociada con los estímulos de la demanda agregada. Ya que las personas con renta más altas tienden a comprar más bienes y servicios importados, el crecimiento estimulado por la renta básica no causaría déficits insostenibles, porque una mayor parte del gasto adicional iría a parar a bienes y servicios locales.

Adicionalmente, existiría un impacto sobre los pequeños negocios y el espíritu emprendedor. Con una seguridad económica, los emprendedores tendrían un menor riesgo en iniciar nuevos negocios, al contar con unos ingresos fijos y seguros en caso de escenarios negativos.

También, animaría a la gente a buscar formación y oportunidades de trabajo en línea con sus habilidades y sus motivaciones. De esta forma, aumentaría la productividad de la economía, facilitando la redistribución eficiente del talento, aumentando el nivel de compromiso con el empleo, y reduciendo la presión de puestos de trabajo de industrias contaminantes (Torres López, 2019).

Una renta básica inclinaría la actividad hacia un crecimiento más sostenible y ecológica y socialmente.

La renta básica como estabilizador automático

Según el keynesianismo, los estados de bienestar y los sistemas de seguridad social eran útiles a la hora de estabilizar los ciclos económicos. En épocas de crecimiento económico, el gasto público es reducido porque habría menos personas que requiriesen asistencia. Mientras que en épocas de recesión, los gastos en desempleo y otras prestaciones aumentaban para ayudar a estimular la demanda y el empleo, y poder estabilizar la caída del crecimiento económico (Standing, 2018).

Dado que la cantidad de renta básica podría fluctuar en función del estado de la economía, esta actuaría como un estabilizador económico automático en la medida que aseguraría un mayor poder de gasto en época de recesión.

Siendo además una medida eficiente, pues en épocas de empleo abundante, las personas tendrían más oportunidad de conseguir mayores rentas y, por tanto, la cantidad

de renta básica podría ser menor. Y en épocas de recesión, podría ser mayor para compensar la pérdida en las oportunidades de conseguir empleo.

Frente a los sistemas de asistencia social actuales, que condiciona a los perceptores a buscar empleo cuando es más escaso; este sistema de estabilización adquiere la ventaja ahorrar gasto público en el apartado burocrático, y de ser menos intrusivo y arbitrario.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de Australia. Este país no entró en recesión por la crisis del 2008 debido a sus inversiones públicas y sus políticas de estimular la economía mediante transferencias a hogares de rentas bajas. Sin ser una renta básica debido a su no universalidad en las transmisiones, mostró los beneficios de estimular la economía otorgando a millones de personas una cantidad adicional para consumir (McDonald & Morling, 2011).

Reguladora de la oferta de trabajo y freno del empleo de baja calidad

Una renta básica podría fomentar el empleo parcial al proporcionar un ingreso base. Con unos ingresos periódicos, los desempleados podrían estar más interesados en ocupar empleos a tiempo parcial o de menor remuneración, que de otra manera solo podrían establecerse en base a la insatisfacción y el empobrecimiento de los demandantes. De forma similar, los ocupados, podrían buscar o negociar empleo de menos horas. Lo que produciría un mayor reparto de trabajo al ser más necesario contratar nuevas personas (Torres López, 2019).

Si unos desempleados recibiesen un subsidio condicionado, solo aceptarían empleos que compensasen la pérdida del subsidio. La compatibilidad de ingresos con la renta básica, provocaría que llegasen a aceptar empleos con bajos salarios o podrían rechazar aquellos en pobres condiciones, incentivando a las empresas a mejorarlas o a automatizarlas.

En consecuencia, desaparecería el incentivo a seguir cobrando la prestación por desempleo a cambio de no aceptar ofertas que reportarían a los trabajadores un beneficio neto menor, debido a los bajos salarios y a otros costes relacionados con el empleo.

Por tanto, la renta básica aumentaría la oferta tiempo parcial y sería un mecanismo eficiente para cuando las empresas ofrezcan ofertas poco retribuidas porque están asociados a actividades de baja productividad.

Sostén de la demanda efectiva para combatir el paro involuntario

La implantación de una renta básica tendría una función muy importante a la hora de sostener la demanda efectiva, al garantizar que todas las personas dispusiesen de un ingreso básico que podrían dedicar al consumo de bienes y servicios (Torres López, 2019).

Aunque podría ocurrir que el aumento de la demanda no se correspondiese con un incremento en la oferta de bienes y servicios, produciendo un aumento de los precios. También, si estuviese financiada mediante impuestos sobre la renta, podría ocurrir que si aumentases los ingresos por la renta básica, la cantidad pagada de impuestos aumentaría en consecuencia.

Todas estas circunstancias dependerán en gran medida del diseño de la renta básica y el resto de políticas.

Fuente de sostenibilidad y de nuevas formas de actividad económica

Una renta básica incentivaría a las personas a dedicar su tiempo a realizar actividades que no necesitasen estar retribuidas monetariamente, pues se realizarían por el mero hecho de disfrutar de la tarea en sí, como los trabajos de voluntariado, y que contribuye más efectivamente al crecimiento personal de los individuos. A largo plazo, esto

estimularía la actividad económica, aunque de una forma diferente a la actual (Torres López, 2019).

Los individuos valorarían más los costes asociados a sus empleos y a sus actos. Con la nueva seguridad obtenida, dispondrían de la capacidad de demandar formas distintas de vida, de movilidad y de consumo. En consecuencia, al modificar las pautas de consumo, de transporte o de ubicación, se estaría demandado la provisión de empleos, bienes y servicios más cercanos, más ecológicos y de menor gasto energético.

4.1.4. Renta básica y cambio tecnológico

La cuarta revolución tecnológica ha provocado un cambio en los modos de producción y en las relaciones laborales. El aumento de la desigualdad en los últimos años ha sido consecuencia de los grandes derivados de la crisis económica como el desempleo, la caída de la actividad. A largo plazo, las causas se originan en los cambios tecnológicos, el comercio internacional y las instituciones (Hidalgo Pérez, 2019).

El cambio tecnológico es una causa por la que ha aumentado la desigualdad a largo plazo, pues se ha de entender el efecto que tienen los cambios tecnológicos sobre la demanda relativa de los trabajadores.

Los avances tecnológicos que automatizan tareas provocan que los trabajadores que se dedicaban a ello queden desplazados. En consecuencia, buscarán un nuevo empleo acorde a sus habilidades, y si estas no son complementarias con la nueva tecnología, deberán aceptar ofertas peor remuneradas, ya que esta tipología de trabajadores constituye una creciente oferta que presiona los salarios a la baja. También, porque al encontrar trabajos donde la tecnología no es relevante, la productividad sería menor, provocando que el salario no crezca.

Por el contrario, aquellos que puedan adaptarse a las nuevas tecnologías, serán más demandados, y en consecuencia, mejor remunerados. Como su productividad será mayor, la remuneración también lo será.

Todo ello provocaría una polarización del empleo y un aumento de la desigualdad salarial en consecuencia.

Las nuevas tecnologías modificarán el empleo existente de tal forma que se eliminarán una porción considerable. Sin embargo, esta pérdida no implicaría necesariamente la desaparición de una gran parte de las oportunidades de empleo en términos absolutos. Los trabajadores que fueron sustituidos por nueva maquinaria se desplazarían a otras opciones laborales y otros sectores. Pero no por ello habría una pérdida neta de empleos.

La cuarta revolución tecnológica incide también en la reorganización productiva entre países debido a la deslocalización. La desaparición de empleo correspondería a un nuevo proceso de reorganización del mercado de trabajo. Gracias a su carácter y su rentabilidad, la automatización ha supuesto la eliminación y el traslado de una parte del empleo rutinario, concentrado principalmente en el sector industrial.

El cambio tecnológico está favoreciendo una transferencia de rentas entre factores productivos, desde el trabajo a otros como el capital, a través de la inversión en activos intangibles y en formación para los empleados.

El sector servicios también podría verse afectado, pues tecnologías como la inteligencia artificial conduciría a la eliminación de muchos empleos de ese sector que están basados en identificación y explotación de patrones.

Y estas tendencias de aumento de desigualdad aumentarán a medida que se abaraten los precios de las nuevas tecnologías. Por tanto, son necesarias respuestas institucionales y medidas correctoras, fundamentalmente en educación y en protección de los trabajadores desplazados.

Mediante las transferencias, una renta básica universal podría corregir los efectos de ese proceso. La base de la financiación podría estar en los orígenes tecnológicos de la desigualdad. Por eso, muchas propuestas giran en torno a la idea de gravar una parte de las rentas del capital, sin que eso perjudique uno de los efectos positivos de las nuevas tendencias tecnológicas, el aumento de la productividad y el crecimiento económico a largo plazo.

4.1.5. Renta básica, trabajo y empleo

Una de las críticas que recibe la renta básica es que su aplicación produciría un desincentivo a trabajar y un aumento de la vagancia, bajo la idea que, si alguien obtuviese lo mínimo para subsistir, no estaría dispuesto a buscar empleo (Raventós, 2019).

Para responder a esta crítica, los defensores de la renta básica comienzan haciendo una distinción entre los distintos tipos de trabajo: empleo (también nombrado como trabajo remunerado u ocupación), voluntario y doméstico.

Cive Pérez, además, define “trabajo” como una capacidad que tienen los seres humanos; y empleo, como una construcción social y una mercancía que se valora en el mercado (Reyes Afonso, 2017).

El empleo remunerado es una actividad que permite acceder a una fuente de renta, esta puede ser (Raventós, 2019):

- En forma de salario, si la persona que la recibe es un trabajador por cuenta ajena que depende de un tercero.
- En forma de beneficio, si la recibe una persona propietaria de capital.
- En forma de pensión, si la recibe una persona retirada de la actividad laboral.

El empleo remunerado es una actividad forzada, pues no persigue satisfacer una necesidad en sí misma, sino que es un instrumento para satisfacer necesidades externas al propio trabajo. En otras palabras, la mayoría de personas recurren al empleo remunerado para obtener dinero que les permita adquirir los recursos imprescindibles para la existencia.

En contraste, existe el trabajo voluntario o autotélico, definido como aquel que no tiene un fin extrínseco. Es decir, cuya recompensa o satisfacción está en el propio acto de realizar el trabajo.

Existe también el trabajo doméstico, también denominado reproductivo o de cuidados. Esto engloba todas las actividades de atención y cuidados en el hogar, cuyo resultado es la satisfacción de las necesidades de los miembros que habitan en el hogar. Hay una gran variedad y número de actividades que están incluidas. Por ejemplo, la limpieza, la cocina o el cuidado de otras personas.

La gran diferencia entre estos tipos es que el empleo es remunerado, y el voluntario y el doméstico, no.

La crítica de que una renta básica provocaría que nadie trabajase suele estar enfocada en el empleo remunerado. En la actualidad, hay gente que ya realiza trabajos voluntarios y domésticos sin recibir ninguna asignación monetaria. Por ello, los defensores de la renta básica afirman que, si estuviese implantada, se beneficiarían estos tipos de trabajo, pues

la gente dispondría de la libertad y seguridad económica para realizar actividades que no son remuneradas.

Igualmente, si la renta solo fuese lo suficiente para cubrir las necesidades mínimas, la gente encontraría en el trabajo remunerado una fuente adicional de ingresos. Además, en mejores condiciones, pues los trabajadores tendrían la capacidad de rechazar ofertas de empleos mal remunerados o con malos horarios.

También, como la renta básica eliminaría la trampa de la pobreza (el actual incentivo a no aceptar un empleo por mantener una prestación condicionada que aporta un mayor beneficio al receptor), la gente con bajos recursos podría evitar la economía sumergida animándose a entrar en el mercado laboral. Asimismo, hay quienes podrían aceptar empleos temporales sin el riesgo de perder la prestación (Standing, 2018).

Anteriormente, se ha mencionado el experimento de renta básica de Finlandia. El gobierno entregó a 2000 desempleados aleatorios un pago periódico de 560€ al mes durante dos años (2017 y 2018). Y de manera incondicional, es decir, los pagos no desaparecerían en ninguna circunstancia, ni aunque el individuo obtuviese un empleo (Lu, 2020).

Estos 2000 desempleados se compararon con otros 173000 que no recibirían el pago. Los resultados mostraron que el empleo no se redujo, al contrario, aumentó moderadamente. Especialmente, en familias con niños y gente cuyo idioma principal no era el oficial. Además, la salud mental, el bienestar financiero, y los niveles de confianza para el futuro y la mejora del funcionamiento cognitivo de los receptores mejoraron.

No obstante, es preciso volver a mencionar las limitaciones de los experimentos de renta básica. Raventós (2019) considera que estos experimentos solo son útiles a la hora de ilustrar efectos muy concretos, como la actuación de los receptores al trabajo y el empleo remunerado. No serían útiles a la hora de analizar los efectos a largo plazo o los sociales, derivados de que toda la población, y no individuos aislados, recibiese la renta básica.

A pesar de los argumentos teóricos, los defensores de la renta básica también tienen en cuenta la opinión expresada por el público. A continuación, se muestra una encuesta realizada en 2015 por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública S.L (GESOP, 2015). La ficha técnica de la encuesta se muestra en la siguiente tabla (Figura 3).

Figura 3. Ficha técnica de la encuesta sobre renta básica realizada por GESOP en 2015

Técnica de investigación.	Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI)
Ámbito geográfico.	Cataluña.
Universo.	Población mayor de 16 años residente en Cataluña con al menos un año de residencia.
Tamaño de la muestra.	1600 entrevistas.
Tipo de muestreo.	Muestreo no probabilístico a razón de 400 encuestas en cada ámbito geográfico: <ul style="list-style-type: none">• Barcelona ciudad.• Área metropolitana de Barcelona.• Resto de la región metropolitana.• Resto de Cataluña.

	Muestreo estratificado en los distritos de la ciudad de Barcelona; y por dimensión de los municipios en el resto de ámbitos. Cuotas de sexo y edad para la selección final de la persona a entrevistar. Resultados ponderados a la población real.
Error muestral.	$\pm 2,5\%$ para todas las entrevistas. $\pm 5,0\%$ para cada ámbito territorial.
Nivel de confianza.	95,5% para el caso más desfavorable $p=q=0,5$
Trabajo de campo.	Realizado entre el 13 y el 17 de julio de 2015.

Fuente: (GESOP, 2015)

Respecto a la pregunta, “La renta básica es un ingreso de 650 € mensuales que recibiría toda la población como derecho de ciudadanía, que sería financiada mediante una reforma fiscal, que supondría una redistribución de la renta del 20% de la gente más rica al resto de la población. ¿Estaría más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo que se implantara en nuestro país?” un 72,3% estaría más bien de acuerdo, frente a un 20,1% que estaría más bien en desacuerdo. El resto no contestó.

A la pregunta “Si se implantase una renta básica de 650€ al mes, ¿qué haría?”:

- El 86,62 % de los ocupados (790 encuestados) seguiría trabajando igual, un 8% trabajaría menos horas, y un 2,9% dejaría de trabajar. Este pequeño 10,9% de gente que no seguiría igual (85 personas) fue preguntado a que dedicaría con el tiempo extra que ganaría. Mayoritariamente, el 52,2%, lo dedicaría a la familia; el 16,3% al ocio, y en menor medida, a estudiar, montar un negocio, o dedicarse al voluntariado.
- El 84,4% de los parados (181 encuestados) seguiría buscando un empleo como el que buscaba hasta ese momento, un 11,4% buscaría un empleo con menos horas y un 2,2% dejaría de buscar. Este 13,6% (26 personas) que trabajaría menos horas o no trabajaría dedicaría el tiempo libre ganado principalmente a la familia y a estudiar.
- El 71,7% de los inactivos (617 encuestados) seguiría en la misma situación, el 14% haría alguna otra actividad, pero siguiendo en la misma situación; y un 4,3% dejaría lo que estuviese haciendo en ese momento y haría otra actividad. Las actividades principales que haría ese 18,3% (114 personas) serían estudiar, trabajar en el voluntariado, montar un negocio propio, buscar ocupación o dedicarse a la familia.

Los resultados de este estudio muestran como la gran mayoría de la población activa catalana seguiría en la misma situación, los ocupados, con el mismo empleo; y los parados, buscando uno. Es decir, la opinión pública no avala que con una renta básica aumentaría la vagancia y desincentivaría el trabajo.

Además, cabe mencionar una idea contraria a la defensa del trabajo, y es la defensa al ocio (Fernández, 2004):

- En la segunda mitad del siglo XVIII, Paul Lafargue criticaba la idea de trabajo que perjudicaba a los trabajadores por las pobres y míseras jornadas laborales a la que estaban sometidos, y que les degradaban y agotaban. Por ello, defendía

el derecho a la pereza como un instrumento de liberación. El bienestar para todos implicaría una reducción del tiempo de trabajo productivo.

- El economista John Maynard Keynes en su ensayo “Las posibilidades económicas de nuestros nietos” sostenía que, gracias a la abundancia material en las sociedades ricas, una jornada laboral de quince horas a la semana sería suficiente para la existencia, y la población podría dedicar el resto del tiempo a actividades no necesariamente remuneradas.

El defensor de la renta básica Guy Standing (2018), destaca la importancia del ocio en la época actual, visto a veces como un sinónimo de tiempo malgastado o de indolencia. No por ello utiliza la renta básica para apoyar el derecho a la vagancia. Más bien, ayudaría a tener un mayor control del tiempo y permitiría bajar el ritmo de trabajo de la sociedad moderna. En su opinión, todos los tipos de trabajo y el ocio tienen que estar reconocidos socialmente porque son igualmente necesarios.

En resumen, una renta básica de una cantidad que solo cubriese lo mínimo no desincentivaría el trabajo. Al contrario, lo ayudaría, especialmente el voluntario y el doméstico, que actualmente no está remunerado.

4.1.6. Financiación de la renta básica

La financiación es un aspecto importante de la renta básica. Las distintas propuestas de financiación son producto de la variedad ideológica de sus defensores. Anteriormente se ha comentado que muchos libertarios reducirían la intervención del Estado a lo mínimo posible, con su correspondiente eliminación del Estado del bienestar, a cambio de una renta básica (Standing, 2018).

Como esto no garantizaría una libertad plena, los defensores que son partidarios de la libertad republicana la apoyarían para poder garantizar a los ciudadanos una base material que les permitiese vivir en sociedad sin interferencias de terceros y poder acercarse a la libertad plena. Sin embargo, no sería suficiente y requerirían de otras medidas políticas, económicas y sociales. La renta básica es una más, pues por sí sola no solucionaría todos los problemas relacionados con la libertad republicana y la influencia gente con mayores recursos. Por ejemplo, quedarían pendientes el poder de las grandes empresas, el fraude fiscal, etc.

Por ello, en el modelo que se expondrá a continuación no se reducirían recursos de otras partidas sociales para la financiación de la renta básica, pues se tendrá en cuenta todo lo anterior para poder mantener la libertad republicana.

En 2017, Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens publicaron un estudio sobre cómo sería posible financiar una renta básica universal de una cantidad igual al umbral de la pobreza para todas las personas residentes en España a través de una reforma del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

Los autores utilizaron una base datos, cedida por el Instituto de Estudios Fiscales, de unas dos millones de liquidaciones de IRPF de todo el Estado Español¹ del 2010. Eligieron este año por ser uno en plena crisis económica. Además, datos de años recientes no variarían significativamente los resultados debido a la baja elasticidad del IRPF a los cambios coyunturales (Arcarons, Raventós, & Torrens, 2017).

¹ Excepto la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, debido a que podrían distorsionar los datos al no encontrarse dentro del sistema común. No obstante, los autores consideran que su inclusión podría haber resultado más favorable al estudio, ya que esas comunidades tienen una riqueza superior a la media del resto del Estado.

En total, 43,7 millones de personas deberían ser receptoras de la renta básica: detectándose 34,3 millones declarantes del IRPF y, 9,4 millones que no se identificarían en el impuesto (Figura 4).

Figura 4. Población receptora de la renta básica en la simulación Arcarons, Raventós y Torrens

	INE (personas)	P-IRPF (personas)	P-No IRPF (personas)
Población menor 18 años	7.819.887	6.515.781	1.304.106
Población adulta	35.926.543	27.774.210	8.152.333
Total	43.746.430	34.289.991	9.456.439

Fuente: Arcarons, Raventós, y Torrens (2017) con datos de INE Y AEAT.

La cantidad de la renta básica sería igual al umbral de la pobreza. El criterio utilizado fue el de la Unión Europea: “60% de la mediana de los ingresos de la población”. Los autores la fijaron a 622,50€ mensuales (7471€ anuales) para los mayores de edad. Para los menores, sería una quinta parte de la cantidad de los adultos, es decir, 125€ mensuales (1494€ anuales).

Unas condiciones importantes para el estudio eran que la renta básica no estaría gravada impositivamente por el IRPF, y que la financiación no detraería ningún ingreso por la vía del impuesto. En otras palabras, con la nueva reforma se recaudaría la misma cantidad que en el IRPF más lo suficiente para la financiación de la renta básica.

Además, la renta básica sustituiría los subsidios públicos monetarios de la siguiente manera:

- Si una persona obtuviese una prestación de una cantidad inferior a la renta básica, se eliminaría y comenzaría a cobrar la renta básica. Es decir, su situación mejoraría al recibir una mayor cantidad.
- Si fuese una cuantía superior, la prestación se eliminaría hasta la cantidad que representa la renta básica, y el resto lo obtendría en los mismos términos actuales. Es decir, ni mejoraría ni empeoraría, pues seguiría recibiendo la misma cantidad. La diferencia es que en la nueva situación, la cantidad no la obtendría íntegramente de la prestación, sino una parte de la renta básica, y el resto, de la prestación. Este último criterio provocaría un ahorro de 92.222,29 millones de euros (Figura 5).

Figura 5. Ahorros de la sustitución de los subsidios públicos por una renta básica en la simulación de Arcarons, Raventós y Torrens

Tipo de prestación o subsidio	Importe
Subsidios y ayudas a la familia	3.661,68
Subsidios y ayudas a la vivienda	2.164,76
Subsidios de Exclusión Social	1.957,84
Pensiones	54.023,56
Prestaciones de desempleo	21.405,84
Becas	1.917,07
Clases pasivas del Estado	3.815,71
Reservistas sin destino (FFAA Y FCSE)	258,95
Sacerdotes	126,5

Reclusos	533,57
50% gastos administrativos	2.356,81
Total	92.222,29

Fuente: Arcarons, Raventós y Torrens (2017) con datos de Eurostat, INE, Eustat, Instituto Estadístico de Navarra, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, MUFACE, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Conferencia Episcopal, Ministerio de Trabajo (TGSS y SPEE)

El coste total de la renta básica para las personas no detectadas en el IRPF sería de 62.854,67 millones de euros, para la detectada, 217.237,01 millones de euros. El coste total sería de 285.0444, 53 millones de euros

Las características de la reforma del IRPF que proponen Arcarons, Raventós y Torrens (2017) en el estudio son las siguientes:

- Eliminación de la distinción entre la base imponible general y base imponible del ahorro. Los elementos que corresponden a la del ahorro se integrarían en la base general.
- Cualquier rendimiento negativo se contabilizaría como nulo, eliminando por tanto, las compensaciones entre rendimientos.
- No se deduciría ningún gasto en ningún rendimiento, con la excepción de los de capital inmobiliario, en los que se descuentan los gastos deducibles.
- Eliminación de los mínimos personales y familiares.
- Las reducciones contempladas antes de la determinación del rendimiento neto reducido desaparecerían.
- Eliminación de todas las deducciones de la cuota.
- Los saldos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales no se contabilizarían a la hora de minorar la base imponible.
- Tipo único del 49%, combinado con la transferencia de renta básica, que estaría exenta de tributación.

Gracias al ahorro de 92.222,29 millones de euros surgido de las cantidades que el Estado no pagaría en la nueva situación, se podría financiar la renta básica para la totalidad de la población no comprendida en el IRPF, sobrando además un remanente del ahorro de 29.367,62 millones de euros, que sería útil para la población detectada del IRPF.

El tipo único del 49% permitiría financiar la renta básica a la población detectada, garantizando, por tanto, la misma recaudación del IRPF que antes de la reforma. También ayudaría la financiación externa por rendimientos del trabajo retenidos, pues la aplicación del tipo único referido a las personas no obligadas a declarar contribuiría a la financiación con 21.656,09 millones de euros.

La Figura 6 muestra a la población ordenada en deciles de menor a mayor renta bruta y el tipo efectivo de IRPF respecto a la situación de partida.

Esto ayuda a visualizar quién se beneficiaría en la situación con renta básica. En total, el 70% inferior de la población detectada en el IRPF mejoraría, pues los tipos efectivos son menores. Que algunos tipos sean negativos significa que existiría una transferencia neta. Además, la población no detectada también mejoraría, pues si están en esa situación, tendrían unos recursos con los que no llegan al mínimo para declarar. Se trataría entonces de redistribución del 20% más rico, al 80% restante.

Figura 6. Comparación de los tipos efectivos antes y después de la implantación del modelo de financiación de Arcarons, Raventós y Torrens

Deciles de renta bruta	Cuota ex ante	Cuota ex post
10%	0,15%	-209,23%
20%	0,35%	-59,43%
30%	0,86%	-36,77%
40%	3,28%	-19,95%
50%	6,04%	-9,38%
60%	7,86%	-1,72%
70%	9,84%	6,53%
80%	12,53%	15,56%
90%	15,29%	24,32%
95%	18,38%	29,98%
98%	22,07%	35,02%
100%	28,03%	42,56%

Fuente: Arcarons, Raventós y Torrens (2017). Microsimulador de renta básica

El índice de Gini con la renta bruta del IRPF de partida (en un escenario sin renta básica, previamente al pago de la cuota del IRPF) era de 0,4114. Posteriormente al pago (renta bruta menos cuota de IRPF), de 0,3664. En la nueva situación, el índice sería de 0,2502. Por tanto, la desigualdad en los recursos sería muchísimo menor.

Unas de las críticas que recibe esta propuesta es que conllevaría una serie de defectos, pues la financiación mediante IRPF no sería suficiente, debido a que podría ocurrir que la subida de impuestos provocase una caída de la recaudación, a causa de la alta elasticidad de la base imponible (es decir, lo que aumentaría la renta gravable ante un incremento tributario efectivo) para la población con más renta, y que podría llevarles a evitar pagar impuestos, pues son estos los que serían afectados en mayor grado por la nueva política redistributiva, y los que mayor facilidad tendrían a la hora de eludir la fiscalidad (Rallo, 2015).

Los autores del estudio responden a esta crítica aceptando que pueden existir otros métodos de financiación. Para ellos, su propuesta de reforma del IRPF está relacionada con la enorme cantidad de datos disponible y que no se disponen de otros impuestos. En su opinión, proponen otras fuentes fiscales adicionales para la financiación de la renta básica (Arcarons, Raventós, & Torrens, 2017):

- Incrementación de la imposición ambiental, pues si España estuviese al mismo nivel promedio que la Unión Europea (actualmente es el Estado de la UE con menor recaudación sobre el PIB en este tipo de impuestos) equivaldría recaudar al año unos 8.000 millones de euros adicionales.
- Aumento de los impuestos sobre la propiedad y la riqueza.
- Armonización de los impuestos de sucesiones y donaciones autonómicos. Un tipo promedio de 1% reportaría 21.500 millones de euros anuales.
- Impuesto de transacciones financieras (ITF).
- La eliminación de las deducciones del impuesto de sociedades y un tipo único del 35%, reportaría unos 13.000 millones de euros anuales.
- Reducción del fraude fiscal. En España, el fraude fiscal supera el 20% del PIB. Una reducción a niveles de otros países europeos, cercanos al 15%, podría incrementar la recaudación entre 20.000 y 30.000 millones de euros anuales.

4.2. Argumentos en contra

A continuación, se desarrollan las principales críticas que ha recibido la renta básica y se comentan algunas de las alternativas más llamativas y actuales, lejanas a las medidas clásicas de protección social.

4.2.1. La injusticia de la renta básica

Al contrario de lo que se argumenta a favor, el economista Juan Ramón Rallo opina que la renta básica supondría un ataque a los derechos individuales, sería profundamente insolidaria y distorsionaría el comportamiento de los individuos, (Rallo, 2014).

Para él, toda sociedad se asienta sobre la división del trabajo y la cooperación de sus miembros (en sentido defensivo, cultural, afectivo, asistencial o productivo). Como es más beneficioso vivir en sociedad, que aislarse, no significa que los individuos no se aprovechen de los demás y extraigan más valor de los demás que lo que aportan al resto.

El libre mercado fuerza a los individuos a establecer una cooperación de carácter económico a través de contratos. Gracias a los intercambios, no hay extracción de valor por alguna de las partes. Gracias a ello, los individuos deben dedicar partes de su tiempo a satisfacer necesidades ajenas, y no a satisfacer las propias (Rallo, 2014).

De tal forma que la renta básica sería el mecanismo que fomentase el egoísmo por el cual los individuos satisficieran sus propias necesidades aun cuando no satisfacen las ajenas. Esto disolvería la cooperación económica a la par que no se sufrirían los costes sociales de esa disolución. Cada individuo recibiría una porción de la producción social sin que aportase al resto algo lo suficientemente valioso.

Para Rallo (2014), la renta básica sería una subvención al individualismo antisocial que permitiría vivir a costa de los demás. Cuando los defensores de la renta básica afirman que una renta básica mejoraría el trabajo voluntario y el empleo, estarían afirmando que se desatenderían las necesidades ajenas y se concentrarían egoístamente las propias de los individuos.

Una muestra de que no todos los libertarios son partidarios de una renta básica es el filósofo Robert Nozick. Anteriormente, se han comentado sus ideas de autopropiedad y libertad (Mundó, 2004).

Para él, un sistema sería libre si permitiese a todos los individuos ejercer sus derechos sin ninguna restricción. Esto incluye el derecho a la autopropiedad (es decir, el derecho de propiedad que cada uno tiene sobre sí mismo), del que derivan el resto de derechos. Estos permiten a los individuos a través del trabajo, apropiarse de bienes externos, y venderlos y comprarlos gracias al sistema de libre mercado. Por tanto, una distribución justa de los bienes sería el resultado de los libres intercambios entre los individuos.

En consecuencia, sería injusta e ilegítima toda aquella intervención del Estado más allá de las relacionadas con el mantenimiento de las instituciones básicas necesarias para la protección del libre sistema de intercambio (sistema judicial, sistema policial, protección contra la violencia, el robo y el fraude, etc). De la misma forma, cualquier política redistributiva de recursos, o cualquier otra intervención coercitiva en los intercambios de mercados, no serían compatibles con el reconocimiento de las personas como propietarias de sí mismas. Esto incluiría medidas como la renta básica.

Para el economista Miguel Anxo Bastos Boubeta, la intervención del estado sería ilegítima para otorgar una renta básica de la redistribución de la riqueza (Bastos Boubeta, 2005).

Su idea parte de la crítica a los derechos sociales positivo. Estos serían los que se puedan reclamar a otros sin realizar nada a cambio. Como el derecho al trabajo o a la vivienda.

Bastos Boubeta (2005) no considera verdaderos estos derechos, pues implicarían violentar el derecho de un individuo a usar sus bienes o persona como desee. Por ejemplo, el derecho al trabajo estaría enfrentado con los intereses de los empleadores.

En consecuencia, el derecho a la renta básica supondría siempre que hay unas personas que tienen que trabajar y entregar forzosamente una parte de su riqueza a personas que no conocen. Y esto no sería justo, no debería existir esta obligación, sin que haya reciprocidad por la otra parte.

Tampoco sería justa al estar limitada en único marco institucional, pues se crearían desigualdades entre regiones.

4.2.2. Crítica a la universalidad

Los criterios de universalidad e incondicionalidad de la renta básica son criticados debido a las consideraciones éticas y económicas de otorgar dinero a toda la población en su conjunto, sin ninguna obligación ni reciprocidad, y sin el establecimiento de control alguno.

La ausencia de reciprocidad de la renta básica se podría relacionar con los planteamientos anteriormente mencionados de John Rawls (van Parijs, 2014).

Sus ideas y sus principios de su teoría de justicia (principio de igualdad y de diferencia) justificarían que se realizasen transferencias de rentas a individuos y grupos sociales en situaciones sociales más desventajosas. Sin embargo, nadie debería recibir nada de la sociedad si no proporcionase nada a cambio. Como la renta básica sería una redistribución de la riqueza, las personas que decidiesen deliberadamente no trabajar, se estarían aprovechando de aquellos que sí, pues disfrutarían de una riqueza generada por otros.

Además, estarían disfrutando de otro tipo de beneficio, el ocio. Esto último, Rawls lo ejemplifica con los surfistas de Malibú. Para él, aquellos que dedicasen todo el día a surfear no deberían recibir una renta básica, pues su beneficio está en el ocio en el que disfrutan. Por tanto, ya serían suficientemente compensados y no deberían ser receptores de fondos públicos. El ocio sería un bien tan escaso como el empleo, Y quienes han elegido el ocio compensarían (mediante el no recibimiento de rentas públicas) al resto, pues solo podrían disfrutarlo solo si hay quienes renuncian a él (van Parijs, 2014).

4.2.3. Subproducto del neoliberalismo al Estado del Bienestar

Esta crítica gira sobre la idea de que algunos modelos de renta básica implicarían un desmantelamiento de las políticas sociales y una reducción de la intervención estatal; siendo una medida neoliberal que reduciría el Estado de bienestar y flexibilizaría los mercados laborales.

Al eliminar los mecanismos sociales para reducir la pobreza y la desigualdad, el individuo estaría solo en la lucha contra la pobreza, en lugar de la gestión colectiva, enfatizando el individualismo característico del liberalismo y el neoliberalismo (Torres López, 2019).

La idea de renta básica como completa sustitución de los programas públicos ha sido apoyada por economistas neoliberales como Charles Murray o Milton Friedman. Para este último, a través de un impuesto negativo sobre la renta, se podrían eliminar una gran variedad de medidas públicas y que fuesen sustituidos por organizaciones privadas de

caridad, mucho más eficaces y que traería una reducción de los costes administrativos (Kleiner, 2018).

La eliminación de estos sistemas que benefician a la mayoría de la población provocaría un aumento de la desigualdad. Desde un punto de vista de la riqueza social, su eliminación conllevaría que mucha gente de bajos recursos accediese en peores condiciones a vivienda, sanidad, cuidados etc. Siendo la renta básica insuficiente para cubrir dichas necesidades (Kleiner, 2018).

Además, habría que considerar el aumento de los precios de los bienes básicos como la vivienda. Pues estos se basan en cuánto pueden pagar en primer lugar. El aumento del poder adquisitivo no traería una mejora de los productos básicos renta, sino una obligación para aceptar peores condiciones y un aumento de precios que no podría ser compensado con la renta básica. Al final, las necesidades sociales serían convertidas en mercancías para obtener beneficio.

Según Kleiner (2018), la renta básica sería un paliativo a la hora de luchar contra la pobreza y no se modificarían las causas estructurales que provocan la desigualdad y la pobreza en primer lugar. Estos son defectos estructurales, consecuencia del sistema económico, y no se podrían únicamente solucionar otorgando dinero a la población con menor renta. Los monopolios, las relaciones sociales de poder o la gran influencia de los propietarios, seguirían existiendo. Por tanto, serían necesario entonces fuertes programas de protección social y que el fin de la capacidad productiva debería ser la creación de valor real para la sociedad.

Anteriormente, se ha expuesto la libertad republicana y como los ciudadanos deberían tener garantizada los recursos básicos para poder desarrollarse en la sociedad. Muchos defensores de renta básica mantienen propuestas donde esta debería existir junto al Estado del Bienestar y las políticas sociales para poder garantizar la plena libertad efectiva de toda la población. Es decir, la renta básica debería establecer un suelo de un nuevo sistema de distribución junto con otros servicios y prestaciones públicas necesarias (Torres López, 2019).

4.2.4. Disfunciones sociales y económicas

Partiendo de la idea de que habría una subida de salarios y una eliminación de la estigmatización de los subsidios condicionados, Bastos Boubeta (2005) considera que muchos trabajos no se realizarían, provocando una caída de la productividad, al privarse del trabajo de las personas que decidiesen no seguir trabajando de forma remunerada.

Por tanto, si no se aclarasen adecuadamente quienes serían los receptores, podría ocurrir que los inmigrantes exentos de recepción hiciesen esos trabajos desafortunados, provocando un problema de dualización social. Por el contrario, si fuesen receptores, podría ocurrir un efecto llamada y que otros llegasen al país para cobrar la prestación. (Bastos Boubeta, 2005)

La renta básica también tendría consecuencias en los cambios culturales de las preferencias entre ocio y trabajo. Principalmente, en la tasa de ahorro y capitalización; y en los cambios en las relaciones entre generaciones:

Al reducir la incertidumbre con la renta básica, la preferencia a ahorrar recursos para el futuro disminuiría. Esto conducirá a una menor tasa de capital y menor inversión, y de acuerdo a la escuela austriaca, el capital es de gran importancia para la productividad. Sin ahorro previo, no se podría invertir en el desarrollo de nuevas técnicas que permitiesen incrementar la producción y el nivel de vida.

Respecto a los efectos para las familias y para las relaciones intergeneracionales, como los menores de edad serían receptores, no dependerían tanto de sus progenitores, lo que podría provocar una disminución del poder autoritario y que las relaciones se resintiesen. De forma similar, el interés de cuidar ancianos y discapacitados podría reducirse, aumentando el abandono y la soledad.

4.2.5. Inflación

A la renta básica se le acusa de que el incremento del poder adquisitivo conllevaría un crecimiento de los precios, ya que la demanda aumentaría, pero no la oferta.

Este incremento del poder adquisitivo se concentra en los grupos de menor renta. Cuanto menor es esta, mayor es la proporción de su incremento que se destina al consumo. De manera, que el aumento del poder adquisitivo, iría al consumo. Esto podría producir problemas si ese aumento de la demanda efectiva no estuviese acompañado de un correspondiente aumento de la oferta de bienes y servicios. Esto llevaría al aumento inflación, resultando en una situación donde la renta básica no compensa el aumento de los precios (Kleiner, 2018).

A esta crítica los defensores responden que el incremento del consumo podría interpretarse como un impulso de la actividad productiva que favorecería las ventas, el beneficio empresarial y, por tanto, el ahorro de las empresas para financiar la inversión (Torres López, 2019).

Standing (2015) añade que muchas críticas ignoran el impacto de la renta básica en la oferta: como ocurrió en la prueba piloto de Madhya Pradesh (India). El aumento del poder adquisitivo de los aldeanos provocó que los agricultores locales aumentasen su producción, con el uso de más fertilizantes y más terrenos. Los precios unitarios de los alimentos bajaron, mientras sus ingresos aumentaban.

Standing (2018) afirma que en comunidades de renta baja, disminuiría el precio de los bienes y servicios básicos. Esto es porque un sistema de renta básica orientaría la estructura de la demanda agregada hacia bienes y servicios básicos que responden al incremento de la demanda con un aumento de la cantidad y no del precio. También se demandarían productos locales, impulsando el crecimiento y los empleos.

4.2.6. Críticas a la financiación de la renta básica

Anteriormente, se ha comentado una de las críticas de Juan Ramón Rallo (2015) al modelo de financiación propuesto por Arcarons, Raventós y Torrens (2017): debido a la alta elasticidad de la base imponible para la población más afectada, los que tienen mayores rentas, el aumento del tipo impositivo conllevaría una disminución de la recaudación, ya que ese grupo tiene una mayor facilidad para eludir los pagos.

A esto, Rallo (2015) añade la modificación de la distribución de los ingresos antes de impuestos y transferencias de los agentes económicos: si los empleados redujesen sus horas de trabajo gracias al ocio obtenido por la renta básica, sus ingresos disminuirían, y, en consecuencia, la recaudación caería, lo que aumentaría el coste de la renta básica y el modelo propuesto no sería suficiente.

Además, Bastos Boubeta (2005) afirma que muchas propuestas de financiación de renta básica podrían no ser acertadas. Las relacionadas con subidas de impuestos serían difícilmente aceptadas socialmente y no se podría considerar que la cantidad recaudada prevista fuese la misma en la nueva situación de incremento o creación de nuevos impuestos.

Según la Escuela Austríaca, la producción de renta y su distribución son aspectos directamente relacionados. Si se modificase la distribución, la producción variaría. Si se incrementasen los impuestos, la recaudación no tendría necesariamente por qué subir. Esto se desarrolla a partir de la curva de Laffer, los impuestos a partir de un punto provocarían una recaudación menor, como consecuencia del incentivo al fraude fiscal y el desincentivo a la inversión.

Además, los impuestos son uno de los factores que consideran las empresas para su localización, y si fuesen demasiado altos, muchas decidirían desinvertir y buscar otros lugares donde refugiarse.

4.2.7. Críticas feministas

La renta básica ha suscitado un debate relacionado con si su implantación sería positiva para mejorar las condiciones de las mujeres en la sociedad.

Por un lado, la renta básica se ha defendido, entre otros muchos motivos, como una medida que ayudaría a conseguir la equidad de género, pues corregiría los sistemas contemporáneos de seguridad social, aumentaría la autonomía económica de las mujeres en el hogar y evitaría relaciones de dependencia financiera. Además, sería adaptable a los cambios sociales y los nuevos modelos familiares (Raventós, 2019).

Por el contrario, otras feministas creen que no amenazaría la división sexual del trabajo y los roles de género tradicionales, si no que por el contrario, se reforzarían (Gheaus, 2008):

La introducción de una renta básica en un sistema donde el estilo de vida fuese simétrico respecto al género, es decir, donde no existiesen injusticias importantes de género podría ser positivo para las mujeres. Sin embargo, al no estar en esa situación, la medida no ayudaría a acercarse a ese escenario, al producirse un descenso en el empleo y un desincentivo en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, pues no tendrían tanta necesidad de acercarse a él y serían presionadas para trabajar en el hogar. Esto polarizaría la división entre mujeres que permanecen en el hogar y las que están en el mercado de empleo.

Por ello, para evitar que se asienten los roles de género tradicionales con la renta básica y que se devalúe el trabajo doméstico, se debería lograr en primer lugar una situación de simetría de género, donde el cuidado del hogar no fuese marcadamente femenino. Esto implicaría medidas relacionadas con el cuidado de los niños, los enfermos, los ancianos y personas con discapacidad.

4.2.8. Alternativas

Piketty y la dotación de capital universal

El economista Thomas Piketty considera que el capitalismo tiene su fundamento en la concentración del poder económico en manos de quienes poseen capital y la concentración de capital no sería útil para el interés general. A pesar de las limitaciones impuestas gracias a la evolución jurídica de los últimos años, los propietarios concentran un gran poder (Piketty, 2019).

Por ello, propone evolucionar el sistema jurídico y fiscal, instituyendo una verdadera propiedad social de capital, mediante una mejor distribución del poder en las empresas, introduciendo un principio de propiedad temporal del capital, gracias a un impuesto progresivo sobre las grandes riquezas que permitiese la financiación de una dotación universal de capital y la circulación y difusión permanente de riqueza.

En primer lugar, propone la participación de los trabajadores en las tomas de decisiones de las empresas y en sus estrategias a largo plazo, la desconcentración del capital y la limitación de los derechos de voto de los grandes accionistas. Como el modelo germánico y los nórdicos, más productivos y menos desiguales.

Para ello, habría que replantearse el sistema de derechos de voto con las aportaciones de capital (un voto por acción) y que las decisiones finales en caso de empate las tomaran los accionistas. Por ejemplo, aplicando un límite de voto similar a todas las aportaciones de capital superiores al 10 por ciento en empresas grandes. Piketty (2019) cree que en una gran empresa una persona no debería concentrar todo el poder, pues se privarían del efecto beneficioso de una deliberación colectiva.

Además, para evitar una ilimitada concentración del capital, sería necesario la búsqueda de acuerdos institucionales para favorecer la circulación de capital. Piketty (2019) propone impuestos progresivos sobre las sucesiones y la renta como en el siglo XX en lugares como Reino Unido y Estados Unidos, donde durante décadas alcanzaron el 70-90 por ciento en la parte más alta de la distribución de la renta y la riqueza.

Esto se complementaría con un impuesto progresivo sobre el patrimonio, importantísima herramienta para garantizar una verdadera circulación del capital. Pues es menos manipulable, y las rentas suelen representar una proporción pequeña del patrimonio de los grandes propietarios. Si alguien no usase su patrimonio para generar rentas, no debería estar eximido del impuesto.

También es un indicador de la capacidad del pago del contribuyente, debido a que las rentas anuales pueden variar por una gran cantidad de motivos. Y respecto al de sucesiones, tiene la ventaja que se adapta más rápidamente a los cambios en la riqueza y capacidad de pago de los contribuyentes.

Como la distribución de la riqueza nunca ha llegado realmente a alcanzar al 50 por ciento más pobre de la población, su participación en la riqueza siempre ha girado en torno al 5-10 por ciento. Por consiguiente, sus posibilidades a la hora de participar en la vida económica son reducidas, en relación a la creación y la gobernanza de las empresas.

Para evitar esto y que este porcentaje de la población participase significativamente en el capital. Piketty (2019) propone un sistema de dotación de capital universal (similar a una herencia para todos), asignada a cada joven-adulto y financiado a través impuestos progresivos sobre la propiedad privada, las herencias y la renta. De tal forma que permitiría difundir la propiedad en la base y limitar su concentración en la parte alta de la distribución.

La dotación de capital propuesta giraría en torno al 60 por ciento del patrimonio medio por adulto. En los países ricos, sería de unos 120.000€ a cada persona de 25 años de edad.

Para Piketty (2019), los modelos de renta básica son útiles para acompañar las medidas anteriores. Sin embargo, se debería evitar que se convirtiese en la única solución, prescindiendo de todos los dispositivos institucionales. Por ello, la renta básica estaría integrada en un programa político más ambicioso, que incluiría la fiscalidad progresiva, la dotación de capital y el Estado social.

Trabajo garantizado

El economista Eduardo Garzón, propone el trabajo garantizado para evitar las limitaciones macroeconómicas que produciría la renta básica, a la par que lograría mejores resultados sociales (Garzón, 2014).

La idea del trabajo garantizado parte de la idea del deber social de no permitir que parados que desean trabajar, sufran las consecuencias de estar en paro, al no recibir ningún tipo de ingreso; y de la necesidad social de la realización de trabajos en la comunidad. Es decir, cuidado de personas, servicios de ocio y cultura, mantenimiento y creación de infraestructuras, protección del medio ambiente, la flora y la fauna, reforestación de terrenos, etc. De esta forma, se les otorgaría a los ciudadanos el derecho a trabajar si así lo desearan, (en caso contrario, recibirían un ingreso básico de menor cuantía).

Una de las ventajas de esta propuesta es que el Estado no tendría que ser el único que financiase y planificase programas concretos de trabajo garantizado. También podrían hacerlo ONGs, cooperativas u otras organizaciones locales, con más experiencia en las necesidades de la comunidad.

La remuneración del trabajo debería ser fija por número de horas, de esa manera, se evitarían tensiones inflacionarias, y ningún trabajador del sector privado trabajaría por menos de esa cantidad.

Garzón (2014) destaca las siguientes ventajas respecto a la renta básica universal:

Según él, el aumento del poder de negociación, obtenido por la renta básica, de los trabajadores provocaría una mejora de las condiciones laborales y la desaparición de los empleos de peores condiciones. En este contexto, si los empresarios no fuesen capaces de adaptarse a las nuevas condiciones demandadas, los precios de sus producciones aumentarían para que el margen de beneficio empresarial no disminuyese. Por el contrario, gracias al trabajo garantizado, la oferta aumentaría gracias a los nuevos programas de trabajo. Además, al ser de un salario uniforme y fijo, impediría empujar los precios por el lado de los costes salariales.

El trabajo garantizado se adaptaría de forma más óptima a los ciclos económicos: en épocas de expansión, el sector privado ofrecería empleos mejor pagados que el trabajo garantizado. En épocas de recesión, los desempleados optarían por empleos en los programas de trabajo garantizado, suavizando el decrecimiento económico.

Además, con el trabajo garantizado se crearía producción social, es decir, empleos que mejorasen el medio ambiente y las condiciones de vida de muchas personas.

Garzón (2014) también menciona que la renta básica no prepararía ni formaría a la gente; que generaría menor trabajo digno, al depender de la voluntad del empresario de mejorar las condiciones de trabajo, y que no otorgaría el sentimiento de sentirse útil para la sociedad.

No obstante, algunos defensores de renta básica universal critican esta propuesta. Arcarons, Raventós y Torrens (2014), rebaten que Garzón no tuviese en cuenta los tres tipos de trabajo (remunerado, voluntario y doméstico), ya que su propuesta se centra solo en el remunerado; y que considerase la renta básica únicamente una herramienta para reducir la pobreza. Para ellos, la renta básica también otorgaría una libertad al garantizar la existencia material garantizada, favorecería los trabajos voluntarios y domésticos, igualmente necesarios para la sociedad; y mejoraría las condiciones laborales gracias al aumento del poder de negociación de los trabajadores. Y no necesariamente se produciría inflación, debido al crecimiento económico que podría generar la renta básica.

Rallo y la renta de propietarios y renta de subsistencia subsidiaria

Esta propuesta surge de la crítica anteriormente descrita de Juan Ramón Rallo (2014). Para él, la renta básica eliminaría la cooperación social del libre mercado y reduciría la división del trabajo.

Sin embargo, la renta básica reuniría las características de su propuesta, la renta de propietarios (como las del capital) y la de subsistencia subsidiaria.

Las rentas del capital permitirían a la gente vivir sin trabajar (esto no significaría que no se generase valor para los demás), gracias al ahorro y a la inversión. Los ingresos generados por esto permitirían la existencia social a la par que la renta se materializa en bienes y servicios valiosos para la sociedad.

La renta de subsistencia subsidiaria se otorgaría a todos aquellos que fuesen incapaces de generar valor para la sociedad. Por ello, se les debería compensar. A diferencia de la renta básica, solo se otorgaría a aquellos que quisieran cooperar en el mercado, pero tienen la incapacidad de valerse por sí mismos. De la misma forma, no la recibirían aquellos que pueden pero no quieren participar.

Ocio y progreso tecnológico

El economista marxiano Richard D. Wolff (2019) reflexiona sobre las propuestas de renta básica y el origen de las desigualdades que plantea solucionar. Las propuestas de renta básica surgen de la pregunta “¿qué hacer con los desempleados cuando la sociedad no puede garantizar el pleno empleo?” y cómo evitar las tensiones entre empleados y parados, pues los subsidios condicionados provocan eso.

En la sociedad actual, existe un miedo a que el progreso técnico y las mejoras en productividad produzcan un desempleo masivo y la renta básica se plantea como solución que aquellos que no recibirían ningún ingreso para subsistir, no creasen un problema social mayor. En ese contexto, Wolff (2019) busca las raíces de las causas de ese problema y pone en cuestión el sistema capitalista. Teniendo en cuenta que las mejoras en las tecnologías, podrían ser más beneficiosas socialmente, porque se podría producir más con menos esfuerzo humano. Sin embargo, debido al sistema económico, los trabajadores ven el progreso con miedo por la posible pérdida de su única fuente de ingresos.

Su propuesta la ejemplifica con dos escenarios:

En el primero, un propietario instala en su empresa una nueva tecnología que mejoraría la productividad. Sin variar los precios o la producción, podría reducir la plantilla de los trabajadores para aumentar sus beneficios. Es por esta razón por la que los trabajadores temen el progreso tecnológico.

En el segundo escenario, Wolff (2019) propone el ocio como alternativa a ese problema. Manteniendo la misma producción y los mismos precios que en el caso anterior, se usaría la mejora tecnológica para reducir el número de horas de la jornada de los trabajadores. De esa forma, los propietarios obtendrían los mismos beneficios que antes de la nueva mejora, y la mayoría de la población, ganaría tiempo extra, a la par que no se crearían tensiones que dividen a la clase trabajadora. Gracias a este trabajo garantizado, verían como algo positivo el desarrollo tecnológico.

Ingreso mínimo vital

En mayo de 2020, en el contexto de la crisis sanitaria de la COVID-19, se aprobó en España el ingreso mínimo vital. Una medida para reducir la pobreza y equiparar al país al resto de países de la eurozona. Con un coste anual de unos 3.000 millones de euros, el

Gobierno estima que llegaría a unos 850.000 millones de hogares en lo que viven 2,3 millones de personas. Lo podrían solicitar personas entre los 23 y los 65 años (Estévez & Olías, 2020).

El ingreso mínimo vital fijará un umbral para cada tipo de hogar (en función del número de miembros y las situaciones de monoparentalidad). Las cuantías irían desde como mínimo 460€ (hogar de un adulto solo), aumentándose con 139€ por cada miembro con el que conviva, hasta un máximo de 1015€. Además, sería compatible con otras rentas mínimas de las Comunidades Autónomas.

Respecto al empleo, el Gobierno pretende que el ingreso mínimo vital facilite la transición de los individuos desde la exclusión hacia la participación en la sociedad. Por ello, el ingreso estará vinculado a la participación del mercado de trabajo o al acceso a la formación. Incorporará incentivos al empleo a través de reducciones mínimas de la cuota, de tal forma que los receptores no se verían penalizados a la hora de conseguir empleo.

A pesar de ello, muchos defensores de la renta básica están en contra de la medida por varios motivos. Daniel Raventós explica que es un subsidio no universal y condicionado, pues se deben cumplir una serie de requisitos para poder obtener el ingreso, con su consiguiente gasto administrativo. También excluiría al 75% de la población por debajo del umbral de la pobreza, la trampa de la pobreza no desaparecería y se mantendría la estigmatización social de los receptores (García, 2020).

Dos meses después de su aprobación, solo han sido aceptadas una pequeña parte de las solicitudes. El secretario general de UGT, Josep María Álvarez, afirma que de las 714.000 solicitudes presentadas, solo se han resuelto 32.629, de ellas, 4.418 de forma positiva (Agencia EFE, 2020).

Además, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 40% de las solicitudes registradas están faltas de documentación (Rodríguez, 2020).

Las causas están en la numerosa documentación requerida, el intenso volumen de solicitudes, la brecha digital que sufren muchas personas al no tener ordenadores en sus hogares, la elevada burocratización que dificulta a la Seguridad Social cruzar información con otras administraciones y la escasez de trabajadores públicos.

Todo esto ha despertado críticas por parte de defensores de la renta básica universal. Para ellos, no puede existir un subsidio tan condicionado, especialmente en un contexto de emergencia y crisis social. La medida ha sido mal diseñada, tiene fallos estructurales e insuficiencias, desconoce la realidad social, conlleva unos elevados costes de administración y gestión, y por error, podría excluir a gente que lo necesita, pero no ha logrado superar las condiciones (Arcarons, Ramos, Raventós, Raventós, & Torrens, 2020).

5. Conclusiones

En todo momento durante la realización de este trabajo, se han tenido presentes los objetivos establecidos en la introducción:

Una gran variedad de propuestas y alternativas con nombres e ideas similares a la renta básica hizo que fuese necesario delimitar cuáles son las características que definen completamente a la renta básica universal: un pago monetario periódico, que fuese lo suficientemente básico para proveer un nivel mínimo de vida, entregado a toda la población, de manera universal, individual y sin el establecimiento de ninguna condición para su recepción o uso.

Del apartado de los antecedentes y evolución de la renta básica se puede extraer que no es una idea que haya sido creada en los últimos años. Junto al pensamiento económico que la acompaña, tiene un largo desarrollo histórico, desde hace cientos de años, hasta el presente. En la actualidad, el modelo más genuino de renta básica lo encontramos en Alaska y su redistribución de la riqueza social producida por los yacimientos petrolíferos de la región. No obstante, en los últimos años también han surgido experimentos de renta básica, que han avivado el debate de la renta básica universal. A pesar del impacto mediático, no siempre cumplen con todas las características, y muchos defensores opinan que están bastante limitados a la hora de reflejar los efectos.

En el amplio apartado del debate se han mostrado los principales argumentos a favor y en contra de la renta básica.

Como argumentos principales, la renta básica sería una medida justa, financiable, que garantizaría la libertad plena de los receptores, que se adaptaría a la evolución tecnológica que se está desarrollando en los últimos años y que traería una serie de beneficios económicos relacionados con el trabajo y el crecimiento económico.

Por el contrario, los argumentos en contra más destacables están relacionados con las críticas a los principios de la renta básica. Tal y como se plantea, sería una medida injusta, egoísta, inmoral, infinanzable y con unas consecuencias económicas y sociales muy negativas. También se exponen algunas alternativas, distintas a las clásicas de política social, como la dotación universal de capital de Piketty, el trabajo garantizado, la renta de propietarios de Rallo, el uso del progreso tecnológico para obtener más ocio o el ingreso mínimo vital.

Por todo lo anterior, los objetivos propuestos se han alcanzado satisfactoriamente. Se ha podido definir y contextualizar adecuadamente en la actualidad la renta básica universal. Además, se han presentado las principales posturas de manera detallada y ordenada.

Tras todo este extenso análisis, cabría preguntarse cuáles serían las reflexiones que surgirían. En opinión de quien escribe estas palabras, a la par que cierra el trabajo, se destacaría lo siguiente:

En primer lugar, este trabajo muestra lo amplio y desarrollado que es el cosmos de la renta básica universal. Una gran variedad de propuestas, nombres similares, alternativas, posiciones y pensamientos; hacen que no haya una única idea de renta básica universal. Esta variedad, provoca otra gran literatura de respuestas y críticas.

Curiosamente, la renta básica no es una medida encuadrada en un marco ideológico concreto, pues la apoyan y rechazan autores de muy diferente ideología. Aspectos como el modo de financiación, la compatibilidad con otras medidas políticas y sociales, los posibles receptores, la finalidad o la justificación ética, pueden ayudar a centrar a la propuesta y el autor en una forma de pensamiento específico.

La renta básica es también una medida única y ambiciosa que reflejaría la riqueza colectiva, por eso muchas veces es llamada idealista y utópica, que sumado a lo expresado anteriormente, hacen que sea necesario un exhaustivo análisis para poder estudiar y discutir el proyecto. Este trabajo ha pretendido concentrar las principales ideas para el correcto entendimiento del debate de la renta básica más actual y común.

Cabe mencionar que muchas alternativas son interesantes, tanto en sus bases como en sus propuestas, y se podrían integrar junto a la renta básica. Esto podría ser plausible,

teniendo en cuenta que algunas propuestas no implican la reducción de la intervención estatal.

La renta básica universal no es una idea que vaya a desaparecer en el futuro cercano. Los experimentos siguen proliferando, y muchos de los problemas a los que la renta básica se ha planteado como solución, podrían persistir en el futuro. Como en el caso del desarrollo tecnológico y el aumento de la desigualdad, si bien el fin del trabajo es algo lejano.

6. Bibliografía

- Agencia EFE. (20 de Agosto de 2020). *UGT: la gestión del ingreso mínimo es caótica y no lo cobra nadie todavía*. Recuperado el 2 de Septiembre de 2020, de La Vanguardia: <https://www.lavanguardia.com/economia/20200820/482912999272/ugt-ingreso-minimo-vital-imv-josep-maria-alvarez.html?facet=amp>
- Arcarons, J., Ramos, P., Raventós, D., Raventós, S., & Torrens, L. (28 de Agosto de 2020). *El desastre del Ingreso Mínimo Vital y la estupidez: Cipolla tenía razón*. Recuperado el 2 de Septiembre de 2020, de CTXT: <https://ctxt.es/es/20200801/Firmas/33197/ingreso-minimo-vital-renta-basica-estupidez-carlo-m-cipolla.htm>
- Arcarons, J., Raventós, D., & Torrens, L. (24 de Agosto de 2014). *¿Siete argumentos en contra de la Renta Básica? No exactamente*. Recuperado el 25 de Agosto de 2020, de sinpermiso: <https://www.sinpermiso.info/textos/siete-argumentos-en-contra-de-la-renta-bsica-no-exactamente>
- Arcarons, J., Raventós, D., & Torrens, L. (2017). *Renta básica incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa*. Ediciones del Serbal.
- Autores Varios. (25 de Junio de 2020). *Colectivos LGBTI por una Renta Básica Universal (LGBTIxRBU)*. Recuperado el 2 de Julio de 2020, de Manifiesto LGBTI por una Renta Básica Universal: <http://www.redrentabasica.org/rb/manifiesto-lgbti-por-una-renta-basica-universal/>
- Barrena, J. C. (25 de Agosto de 2020). *La renta mínima causa furor entre los alemanes*. Recuperado el 25 de Agosto de 2020, de La voz de Galicia: https://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/economia/2020/08/25/renta-minima-furor-alemanes/0003_202008G25P17992.htm
- Bastos Boubeta, M. A. (2005). La propuesta de la renta básica de ciudadanía: una nota crítica. *RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, 4(2), 103-113.
- BIEN. (s.f.). *History of basic income*. Recuperado el 2 de Abril de 2020, de Basic Income Earth Network: <https://basicincome.org/basic-income/history/>
- Caballero, J. F. (2006). La Teoría de la Justicia de John Rawls. *Voces y contextos*, 2(1), 1-22.
- Cordova, G. (27 de Septiembre de 2019). *2019 PFD amount officially announced at \$1,606*. Obtenido de KTUU: <https://www.ktuu.com/content/news/2019-PFD-amount-announced-by-the-Department-of-Revenue-561544941.html>
- de la Fuente, A. (9 de Agosto de 2020). *'Viaje al centro de la precariedad': cuando ni trabajando se llega a fin de mes*. Recuperado el 11 de Agosto de 2020, de Diario

- Público: <https://www.publico.es/economia/viaje-centro-precariedad-trabajando-llega-mes.html>
- Estévez, M., & Olías, L. (29 de Mayo de 2020). *Claves sobre el ingreso mínimo vital: cómo pedirlo, quién tiene derecho y compatibilidad con el empleo*. Recuperado el 15 de Junio de 2020, de elDiario.es: https://www.eldiario.es/economia/Claves-ingreso-pedir-la-derecho-compatibilidad_0_1032396996.html
- Fernández, J. I. (2004). *La cultura de las Rentas Básicas. Historia de un concepto*. Barcelona: Virus Editorial.
- García, P. (22 de Mayo de 2020). *Daniel Raventós: «El Ingreso Mínimo Vital es una renta para pobres»*. Recuperado el 30 de Mayo de 2020, de La Marea: <https://www.lamarea.com/2020/05/22/daniel-raventos-el-ingreso-minimo-vital-es-una-renta-para-pobres/>
- Garzón, E. (13 de Agosto de 2014). *Siete argumentos contra la Renta Básica Universal y a favor del Trabajo Garantizado*. Recuperado el 25 de Agosto de 2020, de La Marea: <https://www.lamarea.com/2014/08/13/siete-argumentos-en-contr-a-de-la-renta-basica-universal-y-favor-del-trabajo-garantizado/>
- GESOP. (2015). *L'Omnibus de GESOP. Informe de resultats*. Barcelona: GESOP.
- Gheaus, A. (2008). Basic Income, Gender Justice and the Costs of Gender-Symmetrical Lifestyles. *Basic Income Studies*, 3(3), 1-8.
- Gobierno Vasco. (2017). *Encuesta de pobreza y desigualdades sociales. EPDS-2016*. Órgano Estadístico Específico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales.
- Hidalgo Pérez, M. A. (2019). Cambio tecnológico y renta básica. *Reforzar el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica. Observatorio Social de La Caixa*, 152-169.
- Howard, D. (1 de Mayo de 2017). *Sam Harris and Charles Murray discuss Universal Basic Income on "The Waking Up Podcast" episode #73*. Recuperado el 15 de Junio de 2020, de Basic Income Network: <https://basicincome.org/news/2017/05/sam-harris-charles-murray-discussion-universal-basic-income-waking-up-podcast-episode-73/>
- INE. (2020). *Encuesta de Estructura Salarial (EES) 2018*. Instituto Nacional de Estadística. Notas de prensa.
- Kleiner, D. (2018). Universal basic income is a neoliberal plot to make you poorer. *MoneyLab Reader 2: Overcoming the Hype*, 215-220.
- Kropotkin, P. (1892). *La conquista del pan* (Primera ed.). Buenos Aires: Libros de Anarres.
- Lu, D. (6 de Mayo de 2020). *Universal basic income seems to improve employment and well-being*. Recuperado el 25 de Agosto de 2020, de NewScientist: <https://www.newscientist.com/article/2242937-universal-basic-income-seems-to-improve-employment-and-well-being/>
- Martín Carretero, J. M. (2019). Nueva desigualdad en España y nuevas políticas para afrontarla. *Reforzar el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica*, 9-25.

- Maza, A. (30 de Junio de 2017). *La Renta Básica, una vieja historia*. Recuperado el 20 de Marzo de 2020, de Izquierda diario: <http://www.izquierdadiario.es/La-Renta-Basica-una-vieja-historia>
- McDonald, T., & Morling, S. (2011). The Australian economy and the global downturn Part 1: Reasons for resilience. *Economic Round-up*, 2(1), 1-31.
- Mundó, J. (2004). Autopropiedad y Renta Básica. *In comunicación presentada en el X Congreso de la Basic Income European Network (BIEN)*. Barcelona.
- Piketty, T. (2019). *Capital e ideología* (Primera ed.). (D. Fuentes, Trad.) Barcelona: Deusto.
- Rallo, J. R. (29 de Mayo de 2014). *Renta básica: infinanciable y egoísta*. Recuperado el 14 de Agosto de 2020, de Juan Ramón Rallo: <https://juanramonrallo.com/renta-basica-infinanciable-y-egoista/>
- Rallo, J. R. (12 de Junio de 2015). *Por qué la renta básica no es financiable en España*. Recuperado el 14 de Agosto de 2020, de Juan Ramón Rallo: <https://juanramonrallo.com/por-que-la-renta-basica-no-es-financiable-en-espana/>
- Raventós, D. (2011). De qué hablamos cuando decimos que la renta básica es (o no) justa: sobre liberalismos y republicanismos. *Revista internacional de pensamiento político*, 6, 223-240.
- Raventós, D. (2019). Renta básica (incondicional). Por qué es importante para la libertad y cómo se puede financiar. *Reforzar el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica*. *Observatorio Social de La Caixa*, 87-117.
- Red de Renta Básica. (s.f.). *¿Qué es la RB?* Recuperado el 14 de Abril de 2020, de Red de Renta Básica: <http://www.redrentabasica.org/rb/que-es-la-rb/>
- Remensal Rodríguez, J. (2002). Providentia et Annona: Cum ventri tibi humano negotium est. *Religión y propaganda política en el mundo romano*, 119-125.
- Reyes Afonso, H. (Julio de 2017). *Cive Pérez: «Con la Renta Básica Universal desaparece el «o te humillas o no comes»»*. Recuperado el 20 de Abril de 2020, de Revista 7iM: <https://www.revista7im.com/2017/07/entrevistas/cive-perez-la-renta-basica-dignifica/>
- Rodríguez, O. (29 de Agosto de 2020). *El fiasco del Ingreso Mínimo Vital: qué está fallando para que la burocracia no responda a la pobreza*. Recuperado el 2 de Septiembre de 2020, de El Independiente: <https://www.elindependiente.com/economia/2020/08/29/el-fiasco-del-ingreso-minimo-vital-que-esta-fallando-para-que-la-burocracia-no-responda-a-la-pobreza/>
- Russell, B. (1918). *Proposed Roads To Freedom*.
- Russo, D. (2004). Necesidad y contingencia en Utopía de Tomás Moro. *Anuario N° 6 - Fac. de Cs. Humanas - UNLPam*, 245-260.
- Standing, G. (2015). Why basic income's emancipatory value exceeds its monetary value. *Basic Income Studies*, 10(2), 193-223.
- Standing, G. (2018). *La renta básica. Un derecho para todos y para siempre*. Barcelona: Pasado y presente.

- Torres López, J. (2019). *La renta básica. ¿Qué es, cuántos tipos hay, cómo se financia y qué efectos tiene?* Barcelona: Deusto.
- Uribarri, I. (30 de Abril de 2017). *El fracaso del modelo de rentas mínimas condicionadas del País Vasco*. Recuperado el Agosto de 6 de 2020, de sinpermiso: <https://www.sinpermiso.info/textos/el-fracaso-del-modelo-de-rentas-minimas-condicionadas-del-pais-vasco>
- van Parijs, P. (2014). Renta básica y justicia social. ¿Por qué los filósofos no están de acuerdo? *Andamios*, 11(25), 173-204.
- van Parijs, P. (5 de Junio de 2017). *The Worldwide March To Basic Income: Thank You Switzerland!* Recuperado el 30 de Junio de 2020, de Social Europe: <https://www.socialeurope.eu/worldwide-march-basic-income-thank-switzerland>
- Wolff, R. D. (1 de Abril de 2019). *Economic Update: Beyond Universal Basic Income*. Recuperado el 28 de Agosto de 2020, de Richard D, Wolff: https://www.rdwolff.com/eu_beyond_ubi